



## La agroecología como proceso: un paso atrás, dos adelante





**volumen 40, N.º 1,  
edición especial  
mayo de 2026**

Publicación de la **Asociación  
Ecología, Tecnología y Cultura  
en los Andes**.

**Dirección:**  
**Asociación ETC Andes**  
Puerto Príncipe, 190, Chorrillos.  
Lima, 15064, Perú.  
Teléfono: 955862212  
www.leisa-al.org

**Equipo editor de LEISA-  
América Latina:**  
Ana Dorrego Carlón  
Teo Pinzás Luna  
leisaagroecologia@gmail.com.pe

**Apoyo editorial y documental:**  
Doris Romero

**Área de comunicación:**  
Martina Ramírez Aguirre

**Editores/as invitados/as:**  
Robin Villemaine  
Mateo Mier y Terán Giménez Cacho  
Mariana Alem Zabalaga

**Diseño y diagramación:**  
Herta Colonia Ardiles

**de portada:**  
Robin Villemaine (fotos superior y  
derecha) e IMCA (foto izquierda).

**ISSN: 1729-7419**

**LEISA revista de agroecología  
40-1** ha sido posible gracias al  
apoyo financiero del Grupo Agence  
Française de Développement, de  
CCFD-Terre Solidaire y de Manos  
Unidas en el marco del Programa  
Transición hacia una Agroecología  
Campesina al Servicio de la  
Soberanía Alimentaria (Tacsá). El  
equipo editorial ha sido muy  
cuidadoso en la edición de los  
artículos publicados en la revista;  
sin embargo, las ideas y opiniones  
contenidas en dichos artículos son  
de entera responsabilidad de los  
autores y las autoras. Si es necesaria  
la reproducción total o parcial de  
alguno(s) de estos artículos, no  
olviden mencionar como fuente a  
**LEISA revista de agroecología**.

## El monitoreo ciudadano de residuos de plaguicidas: una experiencia de incidencia política para promover el consumo de alimentos saludables

6

*En Perú, el uso intensivo de plaguicidas y la débil fiscalización han generado riesgos para la salud y el consumo de alimentos. Desde 2023, un monitoreo ciudadano evidenció que muchos productos frescos superan los límites permitidos e incluso contienen sustancias peligrosas. La iniciativa ha impulsado cambios en supermercados y autoridades, aunque persisten desafíos para garantizar alimentos seguros.*



## Desafíos de una transición agroecológica: lo que aprendimos en la comunidad asháninka de Shintzijaroqui

18

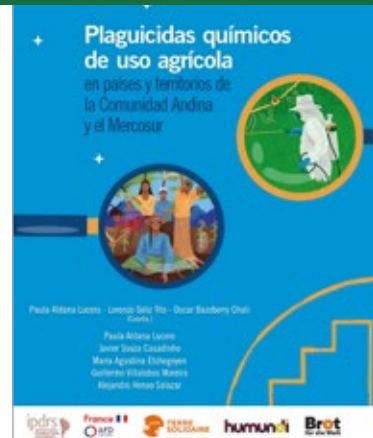
*En la comunidad asháninka de Shintzijaroqui, la transición agroecológica se presenta como un proceso social e intercultural que va más allá de lo técnico. La experiencia muestra avances en diversificación productiva, gestión territorial y liderazgo femenino, pero también tensiones por tiempos, resistencias y limitaciones, evidenciando que la agroecología es un proceso gradual, complejo y en permanente construcción.*



## Reducir el uso de plaguicidas en América del Sur: desafíos y propuestas para una transición agroecológica

28

*En América del Sur, el uso de plaguicidas ha crecido significativamente con impactos en la salud, el ambiente y la soberanía alimentaria. Este fenómeno responde a factores estructurales que refuerzan su dependencia y a vacíos en regulación y control. Frente a ello, se proponen medidas para fortalecer normativas, monitoreo, acceso a información y promover la agroecología como base de sistemas sostenibles.*



## Experiencia de construcción de la Política Pública de Agroecología en el municipio de Tuluá: un paso más hacia la territorialización de la agroecología

38

*El municipio de Tuluá, en Colombia, impulsó la construcción participativa de una Política Pública de Agroecología basada en años de organización campesina. El proceso integró saberes locales, actores comunitarios e instituciones para proponer una visión integral de la agroecología más allá de lo productivo. Destaca la importancia de la organización social para incidir políticamente, aunque enfrenta desafíos de implementación, recursos y articulación con otras políticas.*



## Estimadas lectoras, estimados lectores:

La edición que compartimos es el resultado de un proceso colectivo de construcción que recoge aprendizajes, reflexiones y experiencias desarrolladas en el marco del Programa Transición hacia una Agroecología Campesina al Servicio de la Soberanía Alimentaria (Tacsá) a lo largo de sus dos fases (2018-2026). Este número nace de la necesidad y la responsabilidad de sistematizar y compartir los caminos recorridos en la promoción de la agroecología en territorios muchas veces marcados por contextos adversos y desafiantes.

Las contribuciones reunidas en esta edición buscan ir más allá de la descripción de experiencias. En cada artículo se exploran procesos de transformación social, política y técnica impulsados desde los territorios, dando cuenta de las dinámicas que hacen posible —y también de aquellas que dificultan— el avance hacia la agroecología y el Buen Vivir. Este número propone así una lectura política de los procesos de transición hacia la agroecología, visibilizando estrategias de resistencia, metodologías de acompañamiento y apuestas colectivas que emergen desde las bases.

La construcción de este número ha seguido una ruta metodológica que apostó por el acompañamiento cercano a las autoras y los autores, el intercambio entre pares y la escritura como proceso

reflexivo. A través de talleres, sesiones de trabajo y espacios de retroalimentación, se buscó fortalecer las capacidades de sistematización y producir artículos que, desde datos empíricos y experiencias concretas, dialoguen con debates más amplios sobre la agroecología. En este sentido, la edición didáctica ha sido una herramienta clave para consolidar textos claros, pertinentes y anclados en realidades territoriales.

Queremos expresar un especial agradecimiento a Robin Villemaine, quien coordinó la elaboración de esta edición desde el Tacsá y asumió el rol de editor invitado, acompañando con compromiso y cuidado cada etapa del proceso. Asimismo, agradecemos profundamente a la editora y el editor invitados, Mariana Alem Zabalaga y Mateo Mier y Terán Giménez Cacho, quienes contribuyeron con la lectura y retroalimentación de varios de los textos, enriqueciendo de manera significativa el contenido de este número.

Las experiencias aquí reunidas reflejan la diversidad de contextos, actores y estrategias que configuran hoy los procesos agroecológicos en América Latina. Desde iniciativas de incidencia política local a otras de nivel regional y nacional, pasando de procesos de ordenamiento territorial hasta el fortalecimiento organizativo

y comunitario, este número da cuenta de múltiples caminos que, en conjunto, permiten pensar la agroecología como una apuesta transformadora.

Queremos también anunciar que la próxima edición de la revista estará dedicada al tema «Juventudes en la agroecología» y será publicada en septiembre de 2026, en iniciativa conjunta con la Sociedad Latinoamericana de Agroecología (Socla). Este número buscará visibilizar el papel de las juventudes en la agroecología, sus desafíos frente a la precarización y la migración, así como las estrategias y experiencias con las que están transformando y sosteniendo la vida en sus territorios.

Les invitamos a seguir nuestras novedades en [www.leisa-al.org](http://www.leisa-al.org), así como en nuestras redes sociales (**Facebook: [revistaleisa](#)**; **Instagram: [@leisa.revista](#)**; **LinkedIn: [company/leisa-revista](#)**). Asimismo, les recordamos la importancia de suscribirse para recibir actualizaciones sobre nuevas publicaciones, convocatorias y contenidos complementarios.

Agradecemos profundamente su lectura, confianza y compromiso. Esperamos que este número contribuya a alimentar el debate, inspirar nuevas acciones y seguir tejiendo caminos colectivos hacia la agroecología.

## Contenido

- 4 EDITORIAL**
- 6 El monitoreo ciudadano de residuos de plaguicidas: una experiencia de incidencia política para promover el consumo de alimentos saludables**  
LUIS GOMERO OSORIO
- 12 Procesos sociopolíticos para la transición a la agroecología en Colombia**  
ÁLVARO ACEVEDO OSORIO
- 18 Desafíos de una transición agroecológica: lo que aprendimos en la comunidad asháninka de Shintzijaroqui**  
BILLY RIMARI, RICARDO ZACARÍAS
- 22 Asacasi: la comunidad que ordena su territorio para defender el buen vivir**  
GLADYS YOVANA MAMANI CHOQUEZA, VALERIA CAJIA CAJIA, VÍCTOR LIMAYPUMA CCORICASA
- 28 Reducir el uso de plaguicidas en América del Sur: desafíos y propuestas para una transición agroecológica**  
LORENZO SOLIZ TITO, ROBIN VILLEMINE
- 32 Del conflicto socioambiental al pago por servicios ecosistémicos: el caso de la laguna de Piuray y la ciudad del Cusco**  
JUAN VÍCTOR BÉJAR SAYA
- 38 Experiencia de construcción de la Política Pública de Agroecología en el municipio de Tuluá: un paso más hacia la territorialización de la agroecología**  
ANA CAROLINA OCHOA URIBE, OMAR GIOVANNY SÁNCHEZ QUINTERO
- 44 La Autonomía Guaraní Charagua Iyambae y su caminar hacia el *Yaiko Kavi Päve* («Vivir Bien»)**  
JUAN MIGUEL SUÁREZ AUGSTEN
- 50 Fuentes**
- 52 Trabajando en red**

Se suele decir que la agroecología es práctica, ciencia y movimiento social; pero esa definición, ya clásica, se queda corta. Más allá de un conjunto de técnicas productivas, la agroecología propone una ética de las relaciones entre seres humanos y no humanos, y cuestiona de raíz la forma en que habitamos y organizamos los territorios. No se trata únicamente de producir sin químicos, sino de dejar de concebirnos como agentes externos que extraen recursos para reconocernos como parte de sistemas complejos que sostienen la vida.

En ese sentido, la agroecología es también una propuesta política. Defiende valores de solidaridad, cuidado y justicia, y se opone tanto a la explotación social como al extractivismo que reduce la naturaleza a un conjunto de «recursos» disponibles para su uso inmediato. Lo que está en juego no es solo un modelo agrícola, sino derechos fundamentales: el acceso a la tierra y al agua, y los derechos a una alimentación sana, a vivir en entornos saludables, y a que los pueblos sean reconocidos con sus conocimientos, identidades y formas

propias de organización. La agroecología, por tanto, no es neutral: es crítica, conflictiva y profundamente política.

Este número de LEISA busca abrir una ventana a distintos procesos en curso en la región andina, donde actores diversos están llevando la agroecología al espacio público para disputar su reconocimiento y su lugar en las políticas e instituciones. Estos procesos no parten de un mismo punto ni siguen una sola trayectoria. Surgen, más bien, de problemáticas urgentes como la contaminación de los alimentos, la presión sobre el agua, el avance de la minería, la degradación de los suelos o la pérdida de sistemas de vida. En todos los casos, la agroecología aparece como alternativa productiva, pero también como forma de resistencia y de reconfiguración del territorio.

En algunos contextos, el punto de partida es una crisis que interpela directamente la vida cotidiana. Así, el creciente uso de plaguicidas en la agricultura y la presencia de residuos tóxicos en alimentos de consumo masivo evidencian una problemática que ya no

puede ser invisibilizada. Frente a ello, iniciativas de monitoreo ciudadano han logrado hacer visible lo que antes permanecía oculto, incidiendo en consumidores, mercados e instituciones públicas (p. 6). Estas experiencias ponen en evidencia los límites de los marcos regulatorios vigentes y la magnitud de un problema que trasciende fronteras. En este sentido, análisis recientes sobre la región andina y del Mercosur muestran importantes vacíos en la regulación, el control y la información sobre el uso de plaguicidas, a la vez que plantean la necesidad de avanzar hacia respuestas coordinadas que incluyan el fortalecimiento normativo, la fiscalización, la educación y el impulso decidido de la agroecología como alternativa (p. 28).

En otros casos, la agroecología logra abrirse paso en el ámbito institucional, a menudo después de largos periodos de construcción desde abajo. El reconocimiento del campesinado como sujeto de derechos y la incorporación de la agroecología en políticas públicas en Colombia ilustran cómo estos procesos pueden

acelerarse en determinados contextos políticos (p. 12). Sin embargo, también evidencian que su legitimidad no proviene únicamente de decisiones gubernamentales, sino de trayectorias previas de organización social, articulación territorial y diálogo entre actores. A escala territorial, estas dinámicas se concretan en experiencias locales donde la agroecología se articula con procesos de construcción de paz y desarrollo rural (p. 38).

Es en los territorios donde estas tensiones se vuelven más visibles. Allí, la agroecología se despliega como una práctica situada, estrechamente vinculada a la defensa de la vida y a la permanencia de las comunidades. En los Andes peruanos, por ejemplo, la disputa por el agua revela los límites de un modelo que prioriza la demanda urbana sin reconocer el papel de las comunidades en la conservación de los ecosistemas. La gestión de cuencas con enfoque agroecológico emerge así como una respuesta que busca reequilibrar relaciones y reconocer saberes locales (p. 32).

De manera similar, en contextos marcados por

la expansión minera, la agroecología se afirma como una alternativa que propone otras formas de producir, así como de habitar y defender el territorio. No se trata únicamente de resistir, hay también que construir horizontes propios de desarrollo, donde la vida comunitaria, los ecosistemas y las economías locales ocupen un lugar central (p. 22). En la Amazonía, por su parte, procesos de transición agroecológica muestran cómo la recuperación de sistemas productivos diversificados puede ir de la mano con la revitalización de conocimientos e identidades indígenas, en un contexto de fuerte presión sobre los bosques (p. 18).

Más allá de la resistencia, algunas experiencias avanzan hacia formas propias de gobierno territorial. La Autonomía Indígena de Charagua Iyambae, en Bolivia, constituye un ejemplo significativo de cómo la gestión del territorio puede reorganizarse a partir de principios distintos, como el Vivir Bien (p. 44). Aquí, la agroecología no aparece como un sector aislado, sino como parte de un proyecto político más amplio que

redefine la relación entre sociedad, naturaleza y Gobierno.

En conjunto, los casos reunidos en este número dan cuenta de la diversidad y complejidad de los procesos agroecológicos en la región. Muestran avances concretos, aperturas institucionales y experiencias inspiradoras, pero también las tensiones, contradicciones y fragilidades que los atraviesan. Lejos de ser lineales, estos procesos están expuestos a retrocesos, disputas y reconfiguraciones constantes. A pesar de ello, en medio de esas incertidumbres hay un hilo común: la afirmación de la vida como principio organizador.

En contextos marcados por múltiples crisis, la agroecología aparece no como una solución única, sino como un campo de posibilidades en construcción donde se ensayan otras formas de producir, de gobernar y de vivir. Lo que está en disputa es, en última instancia, la posibilidad misma de sostener la vida en los territorios.

Robin Villemaine  
y Ana Dorrego Carlón



Explicación de los *yachachi* (expertos locales) sobre los riesgos de uso de los plaguicidas en el cultivo de fresa. Fuente: RAAA.

# El monitoreo ciudadano de residuos de plaguicidas: una experiencia de incidencia política para promover el consumo de alimentos saludables

LUIS GOMERO OSORIO

## Los plaguicidas: un problema para la salud pública y el ambiente

Cada día, millones de personas consumen frutas y hortalizas sin saber si contienen residuos de plaguicidas. Estas sustancias, utilizadas ampliamente en la agricultura convencional para controlar plagas y enfermedades, forman parte del modelo productivo dominante en muchos países. Sin embargo, su uso intensivo también ha generado crecientes preocupaciones por sus efectos en la salud humana y en los ecosistemas.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha advertido que los plaguicidas constituyen una de las principales causas de intoxicaciones a nivel mundial,

especialmente en países de ingresos bajos y medios. Muchos de estos productos poseen una alta toxicidad y, en numerosos casos, se aplican sin las medidas de protección adecuadas.

La magnitud del problema también se refleja en el mercado global. Un análisis de una base de datos internacional de «productos fitosanitarios» mostró que más de un tercio (35.4 %) de los plaguicidas más vendidos en 2018 pertenecían a la categoría de «altamente peligrosos» (Dowler, 2020) debido a sus impactos en la salud humana, el ambiente y sobre organismos fundamentales para los ecosistemas, como los polinizadores.



Visita a un campo fumigado con un coctel de plaguicidas. Fuente: RAAA.

En el Perú, el uso de plaguicidas ha aumentado de manera sostenida. Según el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (Ceplan), las importaciones para uso agrícola pasaron de 10 553 toneladas en 2007 a 30 967 toneladas en 2021, casi triplicándose en poco más de una década. Desde 2012 superan las 15 000 toneladas anuales y desde 2017 sobrepasan las 22 000 toneladas por año (Observatorio Ceplan, 2020). Diversos análisis indican que los pequeños y medianos productores utilizan cerca del 80 % de estos plaguicidas, siendo también quienes enfrentan mayor exposición en el campo, muchas veces sin contar con equipos de protección adecuados.

Las consecuencias ya se reflejan en la salud pública. Según el Ministerio de Salud (Minsa), en 2023 el 80.2 % de los casos de intoxicación por plaguicidas se concentró en ocho departamentos: Lima, Junín, Arequipa, Cusco, Lambayeque, Apurímac, Amazonas y La Libertad. La tasa anual alcanza 3.4 casos por cada 100 000 habitantes (Minsa, 2023).

Además de las intoxicaciones agudas, existe preocupación por los efectos de la exposición prolongada. En el país se han registrado episodios graves, como el ocurrido en Taucamarca en 1999, cuando murieron 24 niños/as tras consumir un sustituto lácteo contaminado con el plaguicida parathion (Gomero Osorio *et al.*, 2019).

Actualmente el foco también está en los posibles efectos crónicos. La OMS ha clasificado algunos plaguicidas, entre ellos el glifosato, como probablemente cancerígenos para los seres humanos. En esta línea, un estudio reciente publicado en la revista *Nature Health* (Honles *et al.*, 2026) encontró una relación

## La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha advertido que los plaguicidas constituyen una de las principales causas de intoxicaciones a nivel mundial

estrecha entre la exposición a plaguicidas y la aparición de ciertos tipos de cáncer en Perú. Entre 2019 y 2023, los casos de cáncer en el país aumentaron en 33.7 %, siendo el cáncer de estómago uno de los más frecuentes tanto en hombres como en mujeres.

Frente a estos riesgos, el Perú cuenta con la Ley de Inocuidad de los Alimentos (Ley N.º 1062, 2008), que establece que los alimentos destinados al consumo humano deben estar sujetos a vigilancia sanitaria. La norma fija los límites máximos de residuos (LMR) de plaguicidas y otros contaminantes, cuya supervisión corresponde al Servicio Nacional de Sanidad Agraria (Senasa). Esta entidad realiza monitoreos anuales; sin embargo, sus resultados no suelen difundirse ni se traducen en medidas de control más estrictas, especialmente para los productos destinados al consumo interno. En contraste, los alimentos orientados a la



Un fumigador sin protección en el valle del río Chillón.  
 Fuente: Luis Gomeró.

exportación están sujetos a controles más rigurosos. Pero ¿qué ocurre con los alimentos que se consumen en el mercado interno?

Frente a esta situación, un conjunto de organizaciones de la sociedad civil —lideradas por el Consorcio Agroecológico Peruano (CAP) y con apoyo de Salud con Lupa— inició en abril de 2023 un monitoreo de residuos de plaguicidas promovido por las organizaciones de la sociedad civil en alimentos frescos, especialmente hortalizas. Las muestras fueron recolectadas en supermercados y mercados emblemáticos de diversas ciudades del país, siguiendo un protocolo transparente supervisado por un notario público. A su vez, el análisis fue realizado por Métrieux NutriSciences, laboratorio acreditado internacionalmente y reconocido por el Senasa, mediante un método multiresiduos, capaz de detectar hasta 600 tipos de plaguicidas en una sola muestra.

### Resultados del monitoreo ciudadano

Hasta la actualidad, el CAP y sus aliados estratégicos han realizado cuatro monitoreos oficiales de productos frescos —principalmente hortalizas—: en abril de 2023, noviembre de 2023, septiembre de 2024 y mayo de 2025<sup>1</sup>; además de cinco monitoreos complementarios en productos específicos como fresa, piña, durazno, espinaca y brócoli. Los resultados fueron

Monitoreo de residuos de plaguicidas realizado	N.º muestras	% muestras que superan LMR	% muestras que no superan LMR
Primer monitoreo: muestras tomadas en Metro, Tottus, Wong, Plaza Vea y Vivanda (Lima)	84	60.7	39.2
Segundo monitoreo: supermercados en Arequipa, Cusco, Huaraz y Huánuco	103	44.4	55.6
Tercer monitoreo: mercados mayoristas de Lima, Arequipa, Cusco, Huaraz y Huánuco	60	93	7%
Cuarto monitoreo: supermercados Wong (Miraflores), Tottus (San Borja) y Plaza Vea (La Molina)	23	65	35
Fresa: mercados Lobatón (Lince), Mayorista de Frutas (San Luis), Mercado de Magdalena (Magdalena del Mar), San José (Jesús María) y Minka (Callao)	5	100	—
Piña: mercados de Lima (San José de Jesús María, el exterior del Mercado de Surquillo N.º 1 y Santa Rosa en San Borja)	9	100	—
Durazno: Gran Mercado Mayorista de Lima (Santa Anita), Lobatón (Lince), San José (Jesús María), Bellavista y Minka (Callao)	5	80	20
Espinaca: Gran Mercado Mayorista de Lima (Santa Anita), el Mercado Lobatón (Lince), Minka, Bellavista (Callao) y San José (Jesús María)	5	60	4
Brocoli: Minka (Callao), Bellavista (Callao), San José (Jesús María), Lobatón (Lince) y Gran Mercado Mayorista de Lima (Santa Anita)	5	60	40

Fuente: elaboración propia con base en datos de CAP-RAAA.

1 Aunque las muestras no son estadísticas, cabe mencionar que, en el primer monitoreo, el 100 % de las muestras analizadas de apio, pimienta y cebollita china fueron desaprobadas por los altos niveles de agroquímicos; en cambio, en el segundo monitoreo, este porcentaje bajó a la mitad.



Envases de plaguicidas abandonados en un campo de cebolla china. ■ Fuente: Luis Gomero.

preocupantes (ver tabla): en varios de los monitoreos realizados, más de la mitad de las muestras analizadas superó los LMR permitidos, lo que confirma la magnitud del problema. En algunos casos, los niveles detectados resultaron extremadamente altos, llegando a superar en más de 1000 % los límites permitidos, como ocurrió con la fresa y otros alimentos.

El problema no es solo la presencia de residuos, sino también el tipo de plaguicidas detectados. En varias muestras se identificaron plaguicidas altamente peligrosos e incluso prohibidos. Esta situación evidencia fallas en el cumplimiento del sistema regulatorio a lo largo de la cadena de comercialización y uso.

Por ejemplo, en muchos casos no se respeta el periodo de carencia; es decir, el tiempo que debe transcurrir entre la última aplicación del plaguicida y la cosecha. Este periodo es fundamental para evitar que queden residuos en los alimentos frescos que consumimos. Lamentablemente, esta práctica no se implementa porque las plagas son agresivas y dañan la buena apariencia del producto, que el consumidor valora.

Los resultados del monitoreo permitieron visibilizar un problema que afecta silenciosamente la salud de la población: el incumplimiento de las normas sobre uso de plaguicidas, la exposición tanto de consumidores como de aplicadores y la presencia de residuos de sustancias altamente peligrosas, algunas incluso prohibidas en otros países. Esta situación resulta alarmante y exige una respuesta de las autoridades competentes.

---

**Las muestras fueron recolectadas en supermercados y mercados emblemáticos de diversas ciudades del país, siguiendo un protocolo transparente supervisado por un notario público. A su vez, el análisis fue realizado por Mérieux NutriSciences, laboratorio acreditado internacionalmente y reconocido por el Senasa**

---



Campo de cebolla china teñido de azul por los fungicidas Mancozeb y Metalaxil en el valle del Chillón. ■ Fuente: Luis Gomero.

La iniciativa impulsada por organizaciones de la sociedad civil busca precisamente evidenciar estos riesgos y alertar sobre la necesidad de fortalecer la capacidad del Estado para garantizar la inocuidad de los alimentos.

Los resultados del monitoreo también sirvieron de base para desarrollar campañas públicas de información, mostrando los riesgos a los que se exponen los consumidores al ingerir alimentos con residuos de plaguicidas. Además, despertaron el interés de los medios de comunicación, que realizaron una amplia cobertura sobre la problemática en los cinco monitoreos realizados, información que se sigue difundiendo a través de diferentes medios y de las redes sociales.

---

**En este contexto, el Senasa creó el sello de buenas prácticas agrícolas (aprobado mediante RD 042-2025-MIDAGRI-SENASA-DIAI), que establece condiciones para la comercialización de productos frescos**

---

De igual manera, el monitoreo generó discusión en redes sociales, alcanzando a millones de personas; y motivó la reacción de actores públicos como el Senasa y de ciertos supermercados, que comenzaron a tomar medidas para reducir estos riesgos en algunos de sus productos frescos.

### **Principales logros del monitoreo ciudadano**

La iniciativa de monitoreo ciudadano de residuos de plaguicidas impulsada por la sociedad civil ha removido el sistema alimentario, al menos en lo que respecta a los alimentos frescos para el consumo interno. Por primera vez se puso en evidencia que los productos comercializados, tanto en cadenas de supermercados como en mercados emblemáticos de las ciudades, no siempre garantizan la inocuidad para los consumidores.

La buena apariencia de frutas y hortalizas no significa necesariamente que estén libres de residuos de plaguicidas. Esta situación es aún más compleja en muchos mercados urbanos, donde no existe un sistema efectivo de vigilancia y control que garantice que los alimentos que llegan a las ciudades estén libres de estos contaminantes.

El monitoreo también generó efectos positivos. Ante el riesgo reputacional, varios supermercados empezaron a exigir a sus proveedores la aplicación de buenas prácticas agrícolas (BPA) y la presentación de certificaciones que respalden estas prácticas, un paso importante para mejorar la inocuidad de los alimentos.

Asimismo, la continuidad de esta iniciativa a lo largo de los años ha contribuido a un cambio de postura de la autoridad competente. Si al inicio el Senasa cuestionaba la metodología de muestreo, en el cuarto monitoreo se involucró directamente en el

proceso de evaluación, validando el enfoque de la acción ciudadana y fortaleciendo su propia capacidad de monitoreo.

En este contexto, el Senasa creó el sello de buenas prácticas agrícolas (aprobado mediante RD 042-2025-MI-DAGRI-SENASA-DIAI), que establece condiciones para la comercialización de productos frescos. Esta medida se encuentra actualmente en proceso de implementación, al menos en el caso de los supermercados.

El esfuerzo ciudadano también contribuyó a que algunas moléculas altamente peligrosas fueran retiradas del mercado, como paraquat, carbofuran y clorpirifos. Este avance es importante, aunque aún persisten numerosos plaguicidas de alto riesgo para la salud y el ambiente, entre ellos methomil, oxamil, glifosato, mancozeb, imidacloprid, thiametoxam, clothianidin, fipronil y cipermetrina, cuya regulación depende de decisiones técnicas y políticas del Senasa, la Dirección General de Salud Ambiental (Dige-sa) y la Dirección General de Asuntos Ambientales Agrarios (DGAAA).

En conjunto, el monitoreo ciudadano de plaguicidas ha demostrado ser una herramienta eficaz no solo para alertar a los consumidores y promover cambios en actores públicos y privados, sino también para impulsar una mayor sensibilización sobre la calidad de los alimentos. Por ejemplo, se empiezan a percibir cambios en la noción de calidad, tradicionalmente asociada a la apariencia, incorporando cada vez más aspectos relacionados con su contenido y forma de producción.

En este contexto, se observa un incremento en la afluencia de consumidores a bioferias y biotiemas, lo que sugiere un interés creciente por opciones más saludables. Si bien aún no se cuenta con datos cuantitativos sistemáticos, estas tendencias apuntan a que la campaña estaría contribuyendo a una transformación incipiente del sistema alimentario, orientada hacia la producción y el consumo de alimentos más saludables.

No obstante, todavía queda mucho por avanzar: resulta necesario prohibir las moléculas más peligrosas, así como consolidar un sistema de trazabilidad que permita identificar el origen de los productos y reforzar la capacidad de monitoreo, fiscalización y sanción del Senasa frente al uso indiscriminado de plaguicidas. Solo así se podrá garantizar que los alimentos que llegan a la mesa de la población sean realmente saludables.

#### Luis Gomero Osorio

Presidente del Consorcio Agroecológico Peruano (CAP), coordinador de la Red de Acción en Agricultura Alternativa (RAAA) y productor orgánico (Hecosan).

[lgomero@raaa.org.pe](mailto:lgomero@raaa.org.pe)



Envases de plástico del fungicida Mancozeb, prohibido en la Unión Europea, pero de uso libre en Perú.

■ Fuente: Luis Gomero.

## Referencias

- Dowler, C. (2020). *Revealed: The pesticide giants making millions on toxic and bee-harming chemicals*. Unhearsed. <https://unearthed.greenpeace.org/2020/02/20/pesticides-croplife-hazardous-bayer-syngenta-health-bees/>
- Gomero Osorio, L., Murray, D., & Rosenthal, E. (2019). Corporate Impunity in Taucamarca: 19 Years On, Still No Justice. *Business and Human Rights Journal*, 4(2), 329-336.
- Honles, J., Cerapio, J. P., Monge, C., Marchio, A., Ruiz, E., Fernández, R., Casavilca-Zambrano, S., Contreras-Mancilla, J., Vidaurre, T., Condom, T., Zerathe, S., Dangles, O., Deharo, É., Herrera-Zuñiga, J., Pineau, P., & Bertani, S. (2026). Mapping pesticide mixtures to cancer risk at the country scale with spatial exposomics. *Nature Health*. <https://doi.org/10.1038/s44360-026-00087-0>
- Ley N.º 1062, de Inocuidad de los Alimentos (Presidencia de la República [Perú], 2008).
- Ministerio de Salud (Minsa). (2023). *Sala de situación de salud. Vigilancia epidemiológica del riesgo de exposición e intoxicación por plaguicidas*. Viceministerio de Salud Pública. <https://www.dge.gob.pe/portal/docs/vigilancia/sala/2023/SE09/plaguicidas.pdf>
- Observatorio Ceplan. (2020). *Incremento de uso de agroquímicos*. Presidencia del Consejo de Ministros. <https://observatorio.ceplan.gob.pe/ficha/t59>
- Unidad Técnica de Enfermedades No Transmisibles (UTVENT). (2023). *Sala situacional de cáncer en el Perú. Enero-Diciembre 2023*. Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades. <https://www.dge.gob.pe/portal/docs/vigilancia/sala/2023/SE52/cancer.pdf>

# Procesos sociopolíticos para la transición a la agroecología en Colombia

ÁLVARO ACEVEDO OSORIO

El primer gobierno progresista en Colombia abrió espacios institucionales inéditos para el diálogo con los movimientos rurales. Como resultado, se han impulsado procesos participativos para la construcción de políticas públicas relacionadas con la ruralidad, la producción agroalimentaria y la agroecología. Este artículo resume los antecedentes políticos que permitieron estos avances, el papel de los movimientos sociales rurales en la formulación de políticas, y los principales logros y desafíos que enfrenta la transición hacia sistemas agroalimentarios más sustentables en el país.

Campamento de juventudes agroecológicas «Pensando el componente de juventudes en la política de agroecología», desarrollado en Manizales, Colombia, en octubre de 2025. ■ Fuente: Alejandra Reátiga.





Líderes del Movimiento Agroecológico Colombiano, en el marco del Congreso Popular, Político y Científico de Agroecología, realizado en la Universidad Nacional de Colombia en septiembre de 2024. Fuente: Alejandra Reátiga.

## Un nuevo escenario político para el campo colombiano

En 2022, Colombia eligió por primera vez en su historia republicana un gobierno de izquierda. Con más de 11 millones de votos, la fórmula presidencial de Gustavo Petro y Francia Márquez expresó el deseo de amplios sectores sociales de impulsar transformaciones frente a profundas desigualdades sociales, económicas y territoriales.

Uno de los rasgos más destacados del nuevo gobierno fue su apertura al diálogo con distintos sectores de la sociedad, especialmente con organizaciones rurales que históricamente han tenido una participación limitada en la definición de políticas públicas. En ese contexto, se han impulsado iniciativas orientadas a enfrentar problemas estructurales del campo colombiano, como la pobreza rural, la inseguridad alimentaria, la degradación ambiental y los efectos de la crisis climática.

Este artículo analiza el proceso sociopolítico que ha permitido avanzar en la construcción de políticas públicas favorables al campesinado y a la agroecología en Colombia. En particular, se revisa la experiencia de participación de los movimientos sociales rurales en la formulación de estas políticas, así como los principales avances alcanzados y los desafíos que persisten para su consolidación.

## Del Acuerdo de Paz a la política de agricultura campesina

Algunos antecedentes de este proceso se encuentran en la etapa posterior al Acuerdo de Paz firmado en 2016 entre el Gobierno colombiano y las FARC-EP. Aunque con alcances limitados, este escenario abrió espacios de participación para los movimientos sociales rurales en la discusión de políticas públicas orientadas al sector campesino.

---

**Este artículo  
analiza el proceso  
sociopolítico que ha  
permitido avanzar en la  
construcción de políticas  
públicas favorables  
al campesinado y a la  
agroecología en Colombia**

---



## Para los movimientos sociales rurales, este avance representa un logro histórico en la lucha por el reconocimiento político del campesinado

Conversatorio «Hablando de la política en agroecología», organizado por Ecovida en Manizales, Colombia, en octubre de 2025.

■ Fuente: Arlex Angarita Leiton.

Entre 2016 y 2017 se conformó la Mesa Nacional de Agricultura Familiar, un espacio de diálogo entre instituciones estatales y organizaciones sociales que buscó construir lineamientos para una política diferenciada dirigida a los agricultores de pequeña escala. Esta iniciativa se vinculó con la implementación del primer punto del Acuerdo de Paz, referido a la Reforma Rural Integral, cuyo objetivo era mejorar las condiciones de vida de las poblaciones rurales, especialmente en territorios afectados por el conflicto armado.

Uno de los resultados más relevantes de este proceso fue la Resolución 464 del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR), de 2017, que estableció lineamientos para la agricultura campesina, familiar y comunitaria (ACFC). Esta política buscó fortalecer las capacidades sociales, económicas y organizativas de las comunidades rurales mediante un enfoque territorial orientado a mejorar la sostenibilidad de la producción agropecuaria y el bienestar de la población rural.

A diferencia de otros países de la región, donde las políticas de agricultura familiar se enfocaron

principalmente en la inserción de pequeños productores en los mercados, en Colombia este enfoque se vinculó estrechamente con el proceso de construcción de paz (Acevedo-Osorio & Schneider, 2020). Esto favoreció una comprensión más amplia de la agricultura campesina, entendiéndola no solo como actividad económica, sino también como base de formas de vida, organización social y relación con el territorio.

### El giro institucional del primer gobierno progresista

Durante el gobierno de Petro y Márquez se han producido avances institucionales significativos en el reconocimiento del campesinado y en la promoción de políticas rurales diferenciadas. Uno de los hechos más relevantes fue la modificación del artículo 64 de la Constitución Política, aprobada en junio de 2023, que reconoce al campesinado como sujeto de derechos y de especial protección. Con esta reforma, Colombia busca corregir su anterior abstención frente a la Declaración de los



Derechos de los Campesinos y otros pobladores rurales aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas (2018).

Este reconocimiento constitucional establece que las comunidades campesinas mantienen una relación particular con la tierra basada en la producción de alimentos, la garantía de la seguridad y soberanía alimentaria, y la preservación de tradiciones culturales propias. Para los movimientos sociales rurales, este avance representa un logro histórico en la lucha por el reconocimiento político del campesinado.

En paralelo, el gobierno ha fortalecido instrumentos territoriales orientados a proteger las economías campesinas. Entre ellos destacan las zonas de reserva campesina (ZRC), creadas para defender la economía campesina y evitar procesos de concentración de la tierra. Desde su creación en 1994 hasta el inicio del gobierno de Petro, solo se habían establecido siete zonas. Ahora, apenas tres años después del inicio del gobierno progresista, se han creado 14 nuevas ZRC en distintas regiones del país.

Asimismo, el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 incorporó la figura de los territorios campesinos agroalimentarios (Tecam), concebidos como espacios destinados a proteger zonas estratégicas para la producción de alimentos y fortalecer la soberanía alimentaria.

Aunque estas iniciativas no constituyen una política agroecológica en sí mismas, sí introducen elementos estructurales que abren el camino hacia enfoques más amplios de transformación de los sistemas agroalimentarios, más allá de la dimensión técnico-productiva.

### **La construcción participativa de la política de agroecología**

El proceso de construcción de una política pública de agroecología en Colombia ha involucrado acciones tanto en el ámbito legislativo como en el ejecutivo. Eventualmente, se presentó en el Congreso un proyecto de ley sobre agroecología que tuvo diversas etapas. Una primera versión, elaborada en 2022, tenía



Encuentro regional del Movimiento Agroecológico Colombiano en Ibagué, Colombia.

■ Fuente: Arlex Angarita Leiton

un enfoque principalmente productivista y no contó con la participación de los movimientos sociales. Posteriormente, se presentó un nuevo proyecto, que incorporó aportes de organizaciones sociales y propuso una visión más amplia de la agroecología.

Este proyecto plantea declarar de interés nacional la promoción y transición hacia la agroecología, crear una Dirección Nacional de Agroecología y establecer lineamientos para políticas de producción, comercialización y consumo de productos agroecológicos. Sin embargo, debido al limitado tiempo legislativo del actual periodo presidencial, su aprobación como ley de la república resulta incierta.

De manera paralela, el MADR impulsó un proceso participativo para elaborar lineamientos de política

---

**Transformar esta lógica institucional, construida durante décadas para fortalecer el modelo agroindustrial, constituye un desafío que difícilmente puede resolverse en un solo periodo de gobierno**

---

pública en agroecología. Este proceso, que incluyó debates regionales y la participación de organizaciones sociales, finalmente se formalizó mediante la Resolución 331 de noviembre de 2024.

La política propone fomentar la agroecología y otras agriculturas para la vida con el objetivo de construir sistemas alimentarios territoriales sustentables que contribuyan a la transformación productiva, la soberanía alimentaria y el buen vivir de la sociedad colombiana. Para esto, sugiere una serie de lineamientos y acciones estratégicas.

### **Movimientos sociales y articulación agroecológica**

Un elemento clave en este proceso ha sido la articulación de organizaciones sociales que históricamente han promovido la agroecología en el país. Al inicio del gobierno progresista, estos grupos se encontraban relativamente dispersos y con escasa experiencia de interlocución directa con las instituciones estatales.

Es conveniente anotar que los sujetos políticos del movimiento agroecológico entienden que la política no comienza con el Estado, los partidos políticos o las leyes —como plantea Rozitchener (2015)—, sino que está articulada a la manera en que estos grupos sociales han construido ideas en contra de la dominación que suponen las leyes que promueven la revolución verde como la estrategia para producir y alimentar a la sociedad, con sus repercusiones socioambientales.

La necesidad de participar de manera efectiva en la construcción de la política pública impulsó un proceso de articulación que culminó con la creación del Movimiento Agroecológico Colombiano (MACO), una plataforma que reúne más de 20 redes y organizaciones regionales para establecer un canal de diálogo más estructurado con el Gobierno y fortalecer la incidencia política del sector agroecológico a partir de las ideas de sus sujetos políticos.

La agroecología en Colombia tiene una larga trayectoria construida desde prácticas productivas, procesos educativos como las escuelas de campo (Pumisacho & Sherwood, 2005), y experiencias de comercialización en mercados y ferias agroecológicas. Sin embargo, solo a partir de la década de 2010 comenzó a despertar un interés más claro por parte de las instituciones públicas.

Las contribuciones del movimiento social se pueden resumir en la participación activa en la construcción de los lineamientos de política mencionados, así como en la negociación para incluir elementos que dieran a la política un sentido mucho más amplio que solo una forma orgánica de producción, logrando de esa forma incluir elementos como el educativo, la agrobiodiversidad, los sistemas bioculturales y la soberanía alimentaria, entre otros puntos de amplio debate entre los movimientos sociales.

Este proceso de institucionalización ha generado debates dentro de los propios movimientos sociales. Para algunos de sus líderes, incorporar la agroecología en políticas públicas implica el riesgo de que sus principios sean apropiados de manera superficial y reducidos a una simple modalidad de agricultura orgánica, perdiendo su dimensión política y transformadora (Lugo Perea & Rodríguez Rodríguez, 2018); mientras que, para los movimientos sociales, la agroecología es un enfoque transformador de la agricultura y los sistemas agroalimentarios. Otro elemento del debate se centra en el riesgo de que las comunidades de base sean instrumentalizadas para que el gobierno pose como popular e incluyente, sin comprometerse realmente con la implementación de políticas que son construidas con participación social.

### Avances y desafíos de la transición agroecológica

Durante el actual gobierno, los temas relacionados con el campesinado han adquirido una centralidad inédita en las políticas públicas del país; no obstante, este proceso convive con dinámicas estructurales que continúan favoreciendo al agronegocio, el cual aún recibe importantes inversiones del presupuesto nacional. Transformar esta lógica institucional, construida durante décadas para fortalecer el modelo agroindustrial, constituye un desafío que difícilmente puede resolverse en un solo periodo de gobierno.

A pesar de estas tensiones, el contexto político reciente ha permitido abrir espacios de diálogo entre el Estado y los movimientos sociales rurales para avanzar en propuestas vinculadas con la agroecología. Este proceso se ha visto favorecido por la decisión política del gobierno de priorizar la protección de ecosistemas, enfrentar la crisis climática y fortalecer el papel del campesinado en la producción de alimentos.

El proceso de articulación del MACO también ha sido un factor importante, al propiciarse una interlocución más clara entre las organizaciones sociales y entre estas y las instituciones públicas. A ello se suma la articulación de la política agroecológica con instrumentos jurídicos previos, como la Resolución 464 de 2017, sobre Agricultura Campesina, Familiar y Comunitaria.

Otro elemento favorable ha sido la creciente acogida social de la agroecología, impulsada por consumidores interesados en formas de alimentación más saludables y con menor impacto ambiental. Asimismo, existen numerosas experiencias agroecológicas consolidadas en el país que, tras décadas de trabajo técnico y organizativo, han demostrado la viabilidad de estos sistemas productivos (Acevedo-Osorio & Jiménez, 2019).

Sin embargo, el proceso enfrenta desafíos importantes. Entre ellos destacan la necesidad de garantizar recursos financieros suficientes para implementar la

política pública, asegurar su continuidad más allá del actual periodo de gobierno y avanzar hacia una mayor estabilidad jurídica mediante su eventual aprobación como ley de la república.

Del mismo modo, fortalecer la cohesión interna del MACO y su capacidad de movilización será fundamental para sostener la incidencia política del movimiento agroecológico en el futuro, presionando los cambios necesarios.

### Conclusiones

Colombia atraviesa un momento político singular en el que las agriculturas campesinas y la agroecología han ganado visibilidad dentro de la agenda pública. En los últimos años, las políticas impulsadas durante el gobierno progresista han permitido avanzar en el reconocimiento del campesinado y en la construcción de instrumentos normativos orientados a la transformación de los sistemas agroalimentarios. Así, más allá de proponer nuevas formas de producción agrícola, estas iniciativas plantean una visión más amplia de sustentabilidad que involucra dimensiones sociales, territoriales y culturales de la alimentación.

No obstante, el éxito de estas políticas dependerá en gran medida de la capacidad de articulación entre los movimientos sociales rurales, las instituciones públicas y otros sectores de la sociedad. De esa forma, la movilización social, la incidencia política y la continuidad de los procesos participativos serán factores determinantes para consolidar una transición agroecológica capaz de transformar de manera duradera los sistemas agroalimentarios del país.

**Álvaro Acevedo Osorio**

Profesor e investigador del programa de Doctorado en Agroecología de la Universidad Nacional de Colombia. Líder del proyecto Coaliciones por la Agroecología en Suramérica, apoyado por el International Development Research Center (IDRC).

[aacevedoo@unal.edu.co](mailto:aacevedoo@unal.edu.co)

### Referencias

- Acevedo-Osorio, Á., & Jiménez Reinales, N. (comps.). (2019). *La agroecología: experiencias comunitarias para la agricultura familiar en Colombia*. Bogotá: Corporación Universitaria Minuto de Dios, Uniminuto, Universidad del Rosario.
- Acevedo-Osorio, Á., & Schneider, S. (2020). Agricultura Campesina, Familiar y Comunitaria: una perspectiva renovada del campesinado para la construcción de paz en Colombia. *Revista Luna Azul*, (50), 132-155. <https://doi.org/10.17151/luaz.2020.50.7>
- Lugo Perea, L. J., & Rodríguez Rodríguez, L. H. (2018). El agroecosistema: ¿objeto de estudio de la agroecología o de la agronomía ecológica? Anotaciones para una tensión epistémica. *Inter disciplina*, 6(14), 89-112. <http://dx.doi.org/10.22201/ceiich.24485705e.2018.14.63382>
- Pumisacho, M., & Sherwood, S. (2005). *Guía metodológica sobre las ECA's: Escuelas de Campo de Agricultores*. Vecinos Mundiales.
- Rozitchner, L. (2015). *Escritos políticos*. Buenos Aires: Ediciones Biblioteca Nacional.



Silvia Peñaloza Chinchay, presidenta de la Cooperativa Agraria de Productores de Shintzijaroqui, muestra una caja de abejas meliponas, importantes polinizadoras que se desarrollan en entornos libres de contaminación. ■ Fuente: Fovida/Diana Faichin.

# Desafíos de una transición agroecológica: lo que aprendimos en la comunidad asháninka de Shintzijaroqui

BILLY RIMARI, RICARDO ZACARÍAS

## Intervenir de otra manera

Fomento de la Vida (Fovida) es una organización no gubernamental (ONG) peruana que promueve el desarrollo territorial sostenible y la mejora de las condiciones de vida de poblaciones de bajos ingresos. Cuando decidimos apostar por la agroecología, no lo hicimos únicamente como una alternativa técnica para mejorar la producción agrícola, sino porque entendíamos que en muchos territorios rurales, y especialmente en comunidades indígenas, los problemas productivos están profundamente entrelazados con procesos más amplios como la expansión del extractivismo, la pérdida de biodiversidad, la dependencia

del mercado, el debilitamiento cultural y la fragmentación del tejido social. Trabajar desde la agroecología, en ese sentido, implica intervenir de otra manera y dialogar con otras formas de entender el territorio, el tiempo y la vida.

La experiencia que desarrollamos en la comunidad nativa asháninka de Shintzijaroqui, en la provincia de Satipo, ubicada en la selva central del Perú, nos permitió poner a prueba esta apuesta. Más que un caso exitoso o un modelo replicable, lo que encontramos fue un proceso complejo, lleno de avances, tensiones y aprendizajes que hoy nos permiten reflexionar sobre cómo intervenir en contextos interculturales.

## Un territorio transformado y el desafío de empezar

Cuando llegamos a Shintzijaroqui, encontramos una comunidad profundamente transformada por décadas de presión del mercado. Como en muchas partes de la Amazonía, las familias habían transitado desde sistemas diversificados —basados en agricultura, caza, pesca y recolección— hacia el extractivismo orientado al monocultivo, primero con el café, luego con la piña y el kion (jengibre), pero además atravesado por los impactos que generan economías ilegales como la de la coca, que si bien no están asentadas específicamente en sus territorios, demandan mano de obra.

Con estos cambios llegaron los agroquímicos, la degradación del suelo y una creciente dependencia de insumos externos. Así, lo que en algún momento se presentó como una vía para mejorar la vida terminó generando nuevas dificultades económicas y ambientales. Algunas familias incluso alquilaban sus tierras a terceros, trabajaban como jornaleros en sus propias parcelas o se adentraban hacia zonas donde cultivaban coca para emplearse. Pero el problema no era solo productivo, también se estaban debilitando prácticas culturales y formas de relación con el territorio.

En ese contexto, emergió una preocupación en la comunidad: la necesidad de encontrar otra forma de producir y vivir. Sin embargo, existía un obstáculo importante, pues la comunidad había tenido experiencias fallidas con instituciones que no cumplieron sus compromisos, lo que generó desconfianza.

Por eso, nuestro primer desafío no fue técnico, sino relacional; y, antes de hablar de agroecología, tuvimos que construir confianza. Para ello, apostamos por un

## La experiencia que desarrollamos en la comunidad nativa asháninka de Shintzijaroqui, en la provincia de Satipo, ubicada en la selva central del Perú, nos permitió poner a prueba esta apuesta

acompañamiento constante a mediano plazo que permitiera mostrar que esta vez el proceso sería distinto.

### Una estrategia integral y sus efectos en la comunidad

Nuestra intervención en Shintzijaroqui no se centró únicamente en cambiar prácticas agrícolas. Desde el inicio, trabajamos con una estrategia integral que articuló dimensiones económicas, ambientales, sociales y políticas.

En lo productivo, promovimos prácticas agroecológicas como el uso de abonos orgánicos, la diversificación de cultivos y los sistemas agroforestales.

Integrantes de la comunidad de Shintzijaroqui que impulsan la agroecología, protegen su biodiversidad y fortalecen el tejido comunitario a través del trabajo colectivo. ■ Fuente: Fovida/Jorge Turpo.



---

**Al inicio, la idea de incorporar la paridad de género en la dirigencia comunal generó resistencia, pues algunos hombres consideraban que las mujeres no tenían la experiencia necesaria. No obstante, el proceso continuó avanzando. Un hito clave fue la aprobación de la cuota de género en las juntas directivas comunales**

---

Apostamos por el cacao nativo como cultivo comercial, pero dentro de un sistema diversificado que también incluyó cultivos para el autoconsumo, rescatando especies olvidadas y medicinales para el resguardo de su seguridad alimentaria. Al mismo tiempo, impulsamos la recuperación de cultivos nativos y saberes ancestrales, entendiendo que la seguridad alimentaria y la identidad cultural están profundamente vinculadas.

Para llevar esto a la práctica, desarrollamos algunos dispositivos clave. Uno de los más importantes fueron las fincas modelo, que en la práctica se convirtieron en «faros agroecológicos». Más que parcelas productivas, estos espacios funcionaron como lugares de aprendizaje colectivo donde los/as propios/as comuneros/as experimentaban nuevas prácticas y compartían sus resultados con otros/as.

En lo ambiental, un elemento clave fue la creación de comités ambientales. Con ellos buscamos dar un paso más allá de la producción individual, promoviendo una gestión colectiva del territorio. Estos comités asumieron tareas como el monitoreo del agua, la reforestación y el cuidado de la biodiversidad.

En esa misma línea, se establecieron áreas de conservación comunal, especialmente en zonas donde nacen fuentes de agua. No fue una decisión fácil: en

Recuperación y valorización de saberes ancestrales y plantas nativas que fortalecen la alimentación, la salud y el bienestar de la comunidad. Fuente: Fovida/Diana Faichin.



un contexto de escasez de tierras, destinar áreas a la conservación generó dudas y resistencias.

Finalmente, impulsamos la formación de una cooperativa agraria, que permitió organizar la comercialización del cacao y otros productos, además de abrir espacios de articulación con programas públicos.

Cada una de estas estrategias respondió a una lógica: conectar lo productivo con lo territorial, y lo técnico con lo organizativo.

Con el tiempo, estos esfuerzos comenzaron a generar cambios. En lo productivo, las familias empezaron a diversificar sus parcelas y a reducir el uso de agroquímicos. En lo organizativo, la cooperativa y el comité ambiental fortalecieron la acción colectiva y la comunidad nativa empezó a tomar decisiones más estructuradas sobre su territorio. Pero uno de los cambios más significativos se dio en el plano social y político en relación con el rol de las mujeres.

Al inicio, la idea de incorporar la paridad de género en la dirigencia comunal generó resistencia, pues algunos hombres consideraban que las mujeres no tenían la experiencia necesaria. No obstante, el proceso continuó avanzando. Un hito clave fue la aprobación de la cuota de género en las juntas directivas comunales. Hoy, mujeres de la comunidad ocupan cargos de liderazgo, incluida la jefatura comunal.

Este tipo de cambios no estaban «programados» como resultados técnicos, pero muestran cómo una intervención puede abrir dinámicas más profundas.

### Tensiones, aprendizajes y lo que viene

El proceso, sin embargo, no ha sido lineal ni exento de dificultades. Uno de los principales desafíos ha sido el tiempo. La agroecología no produce resultados inmediatos, y en el caso del cacao, pueden pasar varios años antes de obtener ingresos significativos. En contextos de necesidad económica, esto genera tensiones.

También hubo resistencias concretas. Por ejemplo, algunos comuneros veían los comités ambientales como una carga adicional de trabajo. Otros cuestionaban la asignación de áreas de conservación, mientras que la reducción del uso de agroquímicos generaba temor frente a posibles pérdidas de cultivos.

A esto se suman los límites de nuestra propia intervención. Trabajamos con recursos acotados, en marcos de proyecto, y con equipos que atienden varios territorios al mismo tiempo. Por ello, no siempre fue posible responder a todas las demandas de la comunidad. Estos elementos nos recuerdan que la agroecología no es solo una cuestión técnica, sino un proceso social lleno de negociaciones, avances y retrocesos.

Aun así, la experiencia deja aprendizajes importantes. Quizás el principal es que la agroecología en contextos indígenas no puede reducirse a la parcela y a la producción. Para el pueblo asháninka, el territorio es un sistema de vida que integra bosque, agua,



Mapa de la finca agroecológica que refleja la integración armónica entre la producción, la recuperación de variedades nativas y la aplicación de prácticas agroecológicas sostenibles. Fuente: Fovida/Diana Faichin.

biodiversidad, y dimensiones culturales y espirituales. Trabajar en agroecología implica, por tanto, dialogar con esa complejidad.

Hoy, en Shintzijaroqui, la transición agroecológica está en marcha. Existen avances importantes: una cooperativa en funcionamiento, prácticas agroecológicas en expansión, áreas de conservación consolidadas, mujeres en roles de liderazgo. Pero también persisten desafíos, como fortalecer la comercialización, ampliar el alcance de las prácticas y consolidar la gestión territorial.

Para Fovida, la experiencia deja una lección clara: intervenir en estos contextos implica mucho más que implementar proyectos, pues involucra acompañar procesos, adaptarse, aprender y reconocer límites. La experiencia nos confirma que la agroecología no es una receta, sino un camino en construcción, que exige tiempo, flexibilidad y una relación cercana con las comunidades.

**Billy Rimari**

Bachiller en Ingeniería Económica con estudios de maestría en Gestión de la Inversión Social. Director del área de Sierra Selva Central de Fovida.  
[billy@fovida.org.pe](mailto:billy@fovida.org.pe)

**Ricardo Zacarías**

Economista con estudios de maestría en Cooperación Internacional y Gestión de Proyectos de Desarrollo. Coordinador de proyecto en Fovida.



Papas nativas de la comunidad de Asacasi. ■ Fuente: Archivo CooperAcción.

# Asacasi: la comunidad que ordena su territorio para defender el buen vivir

GLADYS YOVANA MAMANI CHOQUEZA, VALERIA CAJIA CAJIA, VÍCTOR LIMAYPUMA CCORICASA

A 4000 metros de altura, donde el viento corta y los cerros parecen guardianes antiguos, la comunidad campesina de Asacasi lleva años haciendo algo que en el Perú rural suele sonar aspiracional: planificar su propio futuro. Desde la vertiente oriental de la cordillera, en la provincia de Cotabambas, Asacasi (con sus anexos, caseríos dispersos y 11 054 hectáreas de puna y pajonal) ha apostado por una herramienta poco común en comunidades campesinas: un plan de ordenamiento territorial comunal (POTC) construido por ellos mismos. La decisión no fue técnica ni burocrática, sino política, nacida de una pregunta que hoy resuena en todas sus asambleas: ¿cómo cuidamos nuestro territorio para seguir viviendo bien?

## El territorio como herencia y como mapa de futuro

Para los comuneros y comuneras de Asacasi, el territorio no es solo tierra: es memoria y horizonte. Lo dicen sin buscar metáforas: «Sin territorio no hay comunidad. Y sin comunidad, no hay vida». Ese sentido aparece en todos los testimonios, desde los de dirigentes mayores hasta los de jóvenes que han migrado y regresan para participar en actividades comunales y familiares o para pastorear.

La historia demográfica ayuda a entender ese vínculo. Asacasi, según el censo del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), tiene alrededor de 1060 habitantes que viven en un mosaico de

anexos y caseríos: Ccasacancha, Añoccalla, Ayacasi, Pillco, Ccormo, Parccania, Huasiccasa, Pacla Pacla, Llantapata, etc. Esta dispersión no es síntoma de fragmentación, sino de apropiación del paisaje. Cada familia, cada *ayllu* —término quechua que hace referencia a una comunidad o grupo de familias—, ocupa y cuida una parte de la microcuenca del río Palccaro, que es a la vez fuente de agua, corredor ecológico y sustento de la agricultura familiar.

Cuando CooperAcción llegó a la zona para acompañar procesos de fortalecimiento territorial, Julia Cuadros, fundadora de la organización, recuerda una preocupación que se repetía en las conversaciones con la comunidad: «Si no ordenamos nuestra tierra, otros lo harán por nosotros». El «otros» tiene nombre: el de las empresas mineras que desde hace más de una década han extendido su influencia en Cotabambas, incluyendo gigantes como MMG Las Bambas y BHP Billiton, entre otros.

Frente a ello, y en un contexto en el que las propuestas estatales de ordenamiento territorial tendían a ser más verticales —con avances a escala macro como las zonas ecológicas y económicas (ZEE) en regiones como Cusco o Cajamarca, luego frenados por disputas políticas—, las comunidades del sur andino ya venían ensayando sus propias estrategias, como planes de vida y otras formas de ordenamiento desde lo local. En ese marco, y por decisión de su asamblea comunal, Asacasi (junto a sus anexos) emprendió la elaboración de su propio POTC. Más que partir de cero, el proceso permitió sistematizar y profundizar

---

## El problema no es solo la presión comercial o la lógica del «hacer rápido»; la minería, directa o indirectamente, está transformando las expectativas de parte de la población

---

conocimientos existentes, incorporando nuevas herramientas para identificar las potencialidades y limitaciones del territorio, mejorando la toma de decisiones. Fue un camino lento, reflexivo, lleno de idas y vueltas, pero profundamente pedagógico.

Para los/as comuneros/as, el ordenamiento no es una matriz técnica, sino un ejercicio de lectura del territorio desde la memoria y la convivencia cotidiana. Víctor Limaypuma, uno de los comuneros entrevistados, lo resume de forma precisa: «El ordenamiento es un documento guía, pero si no hay compromiso de los dirigentes, de las instituciones y de la misma comunidad, no sirve. Es una herramienta para defender lo nuestro».

Pobladores de anexo Perccata, parte de la comunidad de Asacasi. ■ Fuente: Archivo CooperAcción.





Presidente del anexo Pillco Ccormo. Fuente: Archivo CooperAcción.

### **Agroecología: sostener la vida en un territorio frágil**

En Asacasi, la agroecología no es una moda ni un concepto académico: es la forma tradicional de sobrevivir a 4000 metros. Rotación de cultivos, descanso de suelos o *laymes*, uso de abonos naturales, almacenamiento de semilla nativa, manejo de pastos, lectura del clima... todo eso que hoy suena innovador en debates urbanos, en Asacasi es simplemente «hacer bien las cosas» y la manera de transmitir los conocimientos ancestrales.

---

**«Sin territorio no hay comunidad. Y sin comunidad, no hay vida». Ese sentido aparece en todos los testimonios, desde los de dirigentes mayores hasta los de jóvenes que han migrado**

---

Pero, a diferencia de otras comunidades andinas, donde las prácticas agroecológicas se han mantenido con mayor continuidad, en Asacasi hay conciencia de que ese modelo está amenazado. Víctor lo explica sin rodeos: «La agroecología se practica, sí pero se está perdiendo porque ya es fácil comprar fertilizantes, pesticidas, fungicidas... La modernidad entra rápido y lo natural toma tiempo, compromiso».

El problema no es solo la presión comercial o la lógica del «hacer rápido»; la minería, directa o indirectamente, está transformando las expectativas de parte de la población. Los proyectos que las empresas suelen ofrecer en el marco de relaciones comunitarias tienden a promover la llamada «agricultura verde», basada en paquetes tecnológicos dependientes de insumos externos. Para Víctor, esto no es casualidad: «Para una empresa minera, la agroecología es un problema, porque la agroecología significa cuidar la naturaleza. Ellos necesitan destruirla para trabajar. Entonces, indirectamente promueven otra forma de agricultura, más química, más rápida».

Por eso, uno de los aportes más significativos del POTC es precisamente la reafirmación de la agroecología como estrategia de desarrollo y defensa territorial. No como una expresión de romanticismo, sino como la única forma viable de producción en un ecosistema altoandino vulnerable al cambio climático. La comunidad lo sabe por experiencia: cuando se dejan de usar insumos naturales, el suelo se endurece; cuando se introducen semillas híbridas, se pierde resistencia a la helada; cuando se plantan pinos o eucaliptos, se reduce el agua para la ganadería. Y en Asacasi, agua y pastos son vida.

### **EL POTC como herramienta de resistencia**

Más que un documento, el POTC de Asacasi es un instrumento político y de gestión territorial. La comunidad lo utilizó para delimitar zonas de conservación, áreas de recarga hídrica, espacios productivos, rutas ganaderas y zonas de riesgo. También para definir qué no se debe tocar, qué sí se puede mejorar y cómo.

En un contexto donde la minería amplía su presencia a través de exploraciones y servidumbres, esta herramienta sirve para poner límites claros. No es que una empresa vaya a detenerse por la existencia de un plan comunal, pero cuando una comunidad sabe qué quiere, qué no quiere y por qué, la negociación cambia. Víctor lo plantea de forma pragmática: «La resistencia tiene que ser organizativa. Desde las familias, desde las mujeres, desde los jóvenes. Hay que tener propuestas claras: qué tipo de forestación queremos, qué semillas vamos a defender, qué tecnologías sirven y cuáles no».

El ordenamiento, así entendido, es una brújula; permite que la comunidad discuta con argumentos propios, basados en su conocimiento del territorio. Y

ese conocimiento no es menor. En Asacasi, cada zona tiene nombre y significado: los bofedales donde bebe el ganado, las laderas donde crece el *chillihua*, los cerros vestidos de *qewña* que aún resisten, las tierras altas donde el viento arrastra la nevada.

El proceso de definición del POTC no solo permitió que todo ese conocimiento quedara registrado, validado colectivamente y convertido en un instrumento político; también abrió un espacio vivo de encuentro y discusión. En ese ir y venir de debates, fue tomando forma un punto de vista compartido y consensuado —«de la comunidad»— que no necesariamente existía de antemano, junto con una manera propia de nombrarse y reconocerse. Esa construcción paulatina y, a veces, tensa es la que luego hace posible sentarse a negociar y, en última instancia, fortalecer la existencia y la vida de la comunidad. En paralelo, el proceso dio lugar a instancias de formación con jóvenes y promotores de POTC, quienes comenzaron a leer mapas, utilizar GPS, identificar amenazas, analizar el clima y diseñar propuestas de adaptación.

### Mirar el territorio desde el buen vivir

Las entrevistas en Asacasi insisten en un concepto que merece pausa: el buen vivir. No como la versión ecuatoriana o boliviana institucionalizada, sino como una comprensión propia, más íntima: vivir en

---

**La comunidad lo sabe por experiencia: cuando se dejan de usar insumos naturales, el suelo se endurece; cuando se introducen semillas híbridas, se pierde resistencia a la helada; cuando se plantan pinos o eucaliptos, se reduce el agua para la ganadería. Y en Asacasi, agua y pastos son vida**

---

Zona forestada con *qewña* y cerco en el anexo Pillco Ccormo, comunidad de Asacasi. ■ Fuente: Archivo CooperAcción.



---

## Esa construcción paulatina y, a veces, tensa es la que luego hace posible sentarse a negociar y, en última instancia, fortalecer la existencia y la vida de la comunidad

---

equilibrio con la naturaleza, respetar la vida comunitaria, cuidar las semillas, mantener los modos de vida que garantizan continuidad. Otro de los comuneros entrevistados lo expresa con claridad: «El buen vivir está destruido en la práctica, sobre todo en las zonas urbanas, porque se copia mucho la vida occidental. Eso hay que replantearlo, recuperarlo. Requiere tiempo y esfuerzo». Y agrega algo que es central para entender la situación actual: «En zonas mineras hay que pelear el buen vivir. Porque si no, se pierde».

El POTC, desde esa perspectiva, no es solo un documento técnico: es un acto de re-existir; de reafirmar un horizonte comunitario en medio de un modelo

extractivo que promete progreso, pero tiende a fragmentar tejidos sociales y a debilitar prácticas ancestrales.

### Los desafíos que vienen

Asacasi no es una comunidad aislada ni exenta de contradicciones. Hay migración, hay demandas de modernización, hay jóvenes que quieren estudiar, hay necesidades económicas reales. El desafío para el POTC —y para la agroecología— es dialogar con esas aspiraciones sin renunciar a la base territorial que sostiene a la comunidad.

El avance de la minería sigue siendo un riesgo latente. La presencia de BHP Billiton en la zona y el historial de conflictos en Cotabambas hacen que la comunidad mantenga una alerta permanente. Los dirigentes lo saben: una herramienta técnica no detiene un proyecto minero, pero sí fortalece la capacidad de respuesta, negociación y defensa de la comunidad.

Otro desafío se juega hacia adentro: sostener la cohesión entre anexos y caseríos. El proceso de desanexión de Ccasacancha, por ejemplo, deja ver que las tensiones territoriales no son solo externas, sino que también emergen en el propio tejido comunal. Lejos de ser una anomalía, estos conflictos forman parte de la dinámica a través de la cual la comunidad se piensa, se redefine y negocia sus propios límites. Sin embargo, este nivel también tiene sus alcances: cuando los problemas trascienden la escala comunal —como ocurre, por ejemplo, en la gestión de una microcuenca—, se vuelve necesario articular con otros actores y niveles de decisión. En ese escenario, el POTC no opera

Comunera forestando con plantas nativas en la comunidad de Asacasi. ■ Fuente: Archivo CooperAcción.





Comuneros en el campo. ■ Fuente: Archivo CooperAcción.

únicamente como un marco común ya dado, sino como una herramienta de base que aporta información y orienta los debates. De hecho, tras la elaboración del plan, la comunidad impulsó la creación de la Mesa de Trabajo Asacasi, un espacio que convocaba a instituciones como la subregión, la municipalidad y organizaciones de la sociedad civil para dialogar sobre su implementación directamente en el territorio. No obstante, este espacio no logró sostenerse en el tiempo y hoy se encuentra inactivo. Aun así, la gobernanza comunal no se resuelve en el documento: requiere de un diálogo constante, capaz de procesar diferencias y sostener acuerdos en el tiempo. Se trata, además, de un proceso de largo aliento, cuyo despliegue e implementación se construyen gradualmente.

Finalmente, está el reto de sostener la agroecología en tiempos de cambio climático. Las heladas y las lluvias son más impredecibles ahora, mientras las plagas se multiplican. La agroecología no es un retorno al pasado, como algunos piensan, sino una innovación anclada en el conocimiento local. Y demanda más trabajo, más organización, más tiempo.

### Un territorio que se defiende caminando en comunidad

Si algo queda claro después de escuchar a los comuneros de Asacasi es la idea de que el territorio no se defiende con discursos, sino caminándolo juntos/as. El POTC nació de recorridos, de debates en asambleas, de noches de frío, de subir y bajar cerros reconociendo puquios, midiendo pastizales, nombrando lo que importa.

Pero nada de eso garantiza el futuro. La presión minera sigue ahí. El cambio climático también. Y las tensiones internas no desaparecen. Lo que hace

distinta a Asacasi no es la ausencia de conflictos, sino la decisión de enfrentarlos colectivamente, con una idea clara de lo que quieren sostener. En un país donde el ordenamiento del territorio suele decidirse lejos de quienes lo habitan, experiencias como esta plantean una pregunta incómoda: ¿quién tiene realmente el derecho de definir qué es desarrollo y para quién?

Al final, lo que deja Asacasi no es una respuesta única, sino una invitación a mirar el territorio no solo como un espacio, sino como una vida compartida en comunidad que, en medio de presiones múltiples y crecientes, insiste en pensar su futuro. Y no desde afuera, sino desde el corazón del territorio que habita, con la posibilidad de sostener lo colectivo y seguir decidiendo juntos y juntas. Porque en comunidad se vive como en familia, en un lugar donde se aprende, se cuida y se resiste. Desde ahí, con pasos firmes y lentos, en un caminar imperfecto, pero guiado por una esperanza obstinada, se va construyendo futuro.

#### Gladys Yovana Mamani Choqueza

Ingeniera química por la Universidad Nacional del Altiplano, con estudios de maestría en Ecología y Gestión Ambiental. Coordinadora del Programa Andino en CooperAcción. [ymamani@cooperaccion.org.pe](mailto:ymamani@cooperaccion.org.pe)

#### Valeria Cajia Cajia

Egresada de Ciencias de la Comunicación por la Universidad Nacional del Altiplano. Trabaja en el área de comunicación de CooperAcción, desarrollando estrategias sobre derechos humanos, ambiente y comunidades campesinas.

#### Víctor Limaypuma Ccoricasa

Antropólogo por la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco, originario de la comunidad de Asacasi (Cotabambas, Apurímac). Ha sido regidor provincial y presidente del Frente de Defensa de Cotabambas.

# Reducir el uso de plaguicidas en América del Sur: desafíos y propuestas para una transición agroecológica<sup>1</sup>

LORENZO SOLIZ TITO, ROBIN VILLEMAINE

El uso de plaguicidas sintéticos en América del Sur viene aumentando de manera sostenida, generando dependencia y graves impactos en la salud humana, los ecosistemas y la soberanía alimentaria. Aunque estos insumos siguen siendo la base de los sistemas agroindustriales, desde los territorios se evidencia la urgencia de transitar hacia modelos alternativos como la agroecología.

En el marco del Programa Transición hacia una Agroecología Campesina al Servicio de la Soberanía Alimentaria (Tacsá), esta problemática fue identificada como un eje central de preocupación. A partir de ello, se impulsó un proceso de análisis orientado a incidir en el debate público, que incluyó la revisión de estudios, el intercambio con organizaciones e investigadores, y la participación en espacios de discusión regional.

Como parte de este proceso, el IPDRS coordinó una investigación sobre los marcos normativos e institucionales en cinco países de la Comunidad Andina y del Mercosur (Aldana Lucero *et al.*, 2025), que evidenció importantes vacíos, especialmente en materia de regulación y control del uso de plaguicidas.

Este artículo recoge los principales hallazgos y plantea cuatro ejes prioritarios de acción para avanzar hacia sistemas alimentarios más saludables y sostenibles:

1. Armonizar y fortalecer las regulaciones a nivel regional.
2. Reforzar el monitoreo y la fiscalización.
3. Ampliar la educación y el acceso a la información.
4. Impulsar la agroecología como base de sistemas resilientes.

Con ello, se busca contribuir al debate público y a la construcción de respuestas colectivas frente a los impactos del uso masivo de plaguicidas en la región.

## Una exposición creciente a los plaguicidas y sus impactos

El uso de productos químicos sintéticos, en particular los plaguicidas agrícolas, ha tenido una rápida expansión a pesar de sus impactos masivos y sin suficiente investigación científica (Bernhardt *et al.*, 2017). Su expansión ha sido acelerada: en 2019 se comercializaron cerca de 4.8 millones de toneladas a nivel mundial, el



1 Artículo coordinado por Lorenzo Soliz (IPDRS) y Robin Villemaine (CCFD-Terre Solidaire), y respaldado por Centro Bartolomé de la Casas (CBC), CooperAcción, Consorcio Agroecológico Peruano (CAP), Fomento de la Vida (Fovida), Instituto Mayor Campesino (IMCA), Instituto para el Desarrollo Rural de Sudamérica (IPDRS), Movimiento Agroecológico Boliviano (MAB) y Movimiento Agroecológico Colombiano (MACO).

doble que en 2005 (Shattuck *et al.*, 2023). Estos compuestos contaminan suelos, agua, aire, alimentos y organismos vivos (Leenhardt *et al.*, 2022).

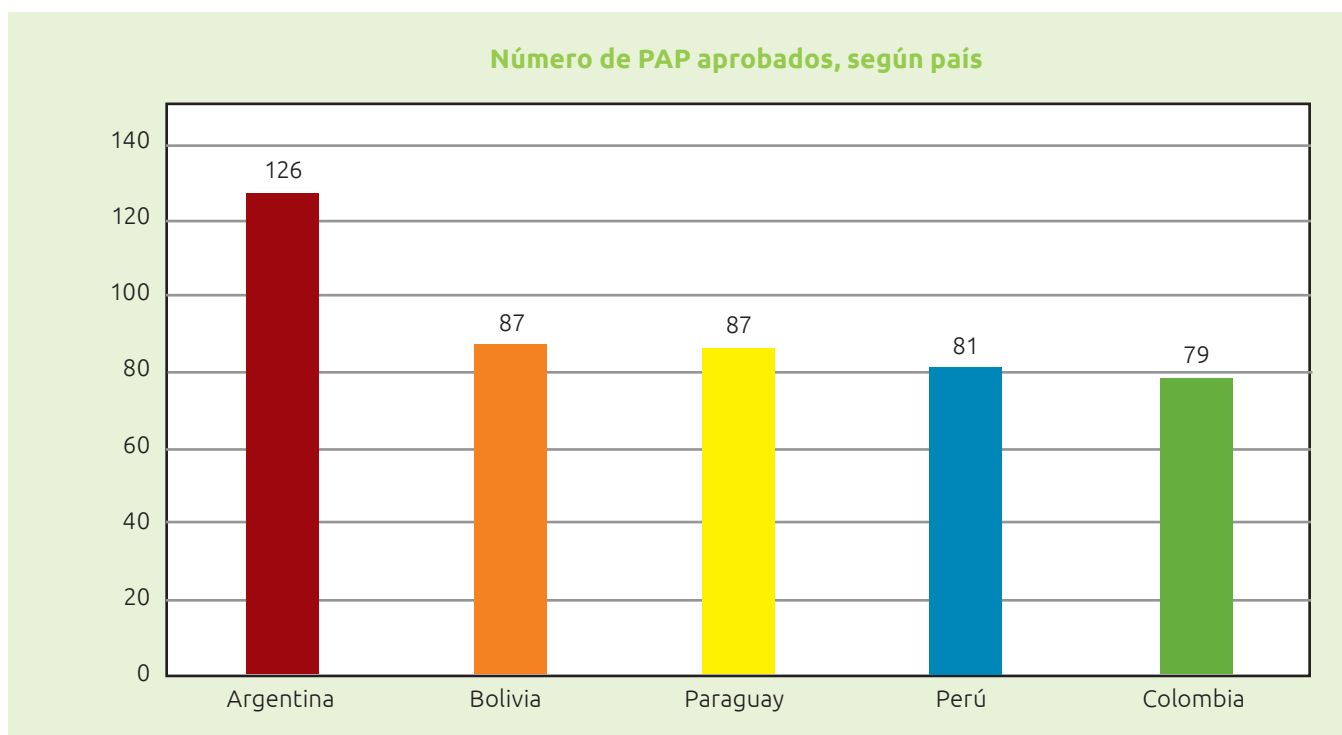
En América del Sur, esta tendencia es especialmente preocupante. Entre 1999 y 2020, el uso de plaguicidas aumentó cerca de un 120 %, alcanzando las 770 000 toneladas (Fundación Heinrich Böll *et al.*, 2023), con importantes diferencias entre países. Una parte significativa corresponde a plaguicidas altamente peligrosos (PAP), reconocidos por sus graves impactos en la salud y el ambiente (Aldana Lucero *et al.*, 2025).

La evidencia científica muestra efectos cada vez más claros sobre la salud humana. Si bien las intoxicaciones agudas —frecuentemente asociadas al incumplimiento de normas— siguen siendo alarmantes, el mayor riesgo proviene de la exposición cotidiana y prolongada a bajas dosis. Esta exposición, muchas veces invisible, se acumula en el ambiente y en los cuerpos, y está asociada a enfermedades crónicas no transmisibles como cáncer, trastornos neurológicos y problemas del desarrollo (Baldi *et al.*, 2021). Además, los plaguicidas pueden favorecer la aparición de enfermedades infecciosas al afectar los equilibrios ecológicos (Ratnadass *et al.*, 2023).

Aunque toda la población está expuesta, los riesgos no se distribuyen de manera equitativa (Castro-Vargas *et al.*, 2025). Los trabajadores de la producción, formulación y comercialización de plaguicidas, así como las familias agricultoras, enfrentan las mayores exposiciones. También están en situación de riesgo las comunidades que habitan cerca de zonas de fumigación, donde estos productos se aplican con frecuencia en la proximidad de viviendas, escuelas y fuentes de agua. Finalmente, consumidores urbanos y rurales ingieren alimentos con residuos de plaguicidas, en muchos casos por encima de los límites legales (Salud con Lupa, 2025).

En el plano ambiental, los plaguicidas degradan los ecosistemas, reducen la biodiversidad, y afectan funciones clave como la polinización y la fertilidad del suelo (Leenhardt *et al.*, 2022). Lejos de ofrecer una solución sostenible, refuerzan la dependencia de los sistemas agrícolas industriales y dificultan las transiciones hacia modelos más resilientes.

Estos impactos implican costos elevados que no son asumidos por quienes se benefician de su comercialización (CCFD-Terre Solidaire & Pollinis, 2021). Además, la dependencia de insumos importados



Fuente: Aldana Lucero *et al.* (2025).

País	PAP aprobados
Argentina	126 de los 445 principios activos registrados son PAP (35.2 % de total global)
Bolivia	87 principios activos de PAP utilizados (24.3 % del total global)
Colombia	79 principios activos aprobados (23.4 % del total global): 45 % insecticidas, 36 % fungicidas y 14 % herbicidas
Paraguay	86 de los 195 plaguicidas importados se consideran PAP (24.02 % del total global)
Perú	81 plaguicidas utilizados figuran como PAP (22.63 % del total global)

genera vulnerabilidades para la soberanía alimentaria y riesgos para la estabilidad comercial, especialmente ante regulaciones internacionales cada vez más estrictas.

## Factores que impulsan el uso y mal uso de plaguicidas

El uso de plaguicidas no responde únicamente a decisiones individuales de productores y productoras. Está determinado por un conjunto de factores estructurales —económicos, políticos, técnicos y culturales— que, en muchos casos, limitan las alternativas disponibles, incluso para quienes buscan transitar hacia prácticas agroecológicas (Castro-Vargas *et al.*, 2025). Por ello, abordar este problema requiere una mirada sistémica que permita identificar responsabilidades más allá del nivel individual.

En determinados contextos, los plaguicidas permiten aumentar la productividad del trabajo, lo que resulta clave cuando la mano de obra es escasa o costosa, ya sea por el éxodo de las juventudes rurales o por la competencia con otros sectores económicos. Asimismo, su uso puede estar condicionado por exigencias de acceso a crédito o a determinados mercados.

A esto se suma el fenómeno conocido como *pesticide treadmill* o «círculo vicioso de los plaguicidas», pues cuanto más se usan, más pierden eficacia, ya que las plagas desarrollan resistencia. Esto obliga a aplicar mayores cantidades o productos más fuertes, simplifica los sistemas productivos y reduce su diversidad, haciéndolos aún más vulnerables. Como resultado, se refuerza la dependencia de estos insumos y aumentan los niveles de contaminación.

Este proceso se ve reforzado por transformaciones en las cadenas globales de producción. Vemos que la expansión de plaguicidas genéricos de bajo costo, junto con la asesoría técnica vinculada a su comercialización, favorece el sobreuso. De igual manera, el avance de cultivos transgénicos asociados a herbicidas ha profundizado esta dependencia.

En el plano político, el *lobby* del sector ha contribuido a mantener regulaciones débiles o insuficientemente aplicadas, apoyándose en narrativas que presentan el uso de plaguicidas como sinónimo de progreso y productividad (Aldana Lucero *et al.*, 2025). En la práctica, esto se traduce en incumplimientos frecuentes por uso de productos prohibidos, presencia de residuos por encima de los límites establecidos, y condiciones inseguras de manejo que afectan a trabajadores, comunidades y consumidores.

Sin embargo, existen alternativas. La agroecología ofrece caminos viables hacia sistemas agrícolas más sostenibles, resilientes y justos, como lo demuestran diversas experiencias en los territorios y estudios recientes (Deguine *et al.*, 2023).

## Propuestas para la agenda política

El uso masivo de plaguicidas constituye un problema público de gran magnitud, con impactos directos en derechos fundamentales como la salud, el acceso a un ambiente sano y la alimentación adecuada (FIAN, 2020). Enfrentar esta problemática requiere respuestas integrales, coordinadas y sostenidas en el tiempo.

Si bien los Estados tienen un rol central, la responsabilidad es compartida entre actores públicos y privados. En este sentido, se proponen cuatro líneas de acción prioritarias orientadas a reducir el uso de plaguicidas y avanzar hacia sistemas alimentarios más sostenibles.

### 1. Fortalecer y armonizar las regulaciones

Se busca avanzar hacia marcos normativos más estrictos y coherentes a nivel regional, que permitan limitar el uso de plaguicidas altamente peligrosos y establecer estándares comunes de protección. Esto implica:

- Armonizar los procesos de autorización de plaguicidas, tomando como referencia los estándares más exigentes, e incorporar mecanismos simplificados para insumos de bajo riesgo.
- Establecer una lista regional de plaguicidas prohibidos en la Comunidad Andina y el Mercosur, priorizando la eliminación de los altamente peligrosos y de sustancias ya restringidas en otras regiones.
- Definir protocolos comunes de monitoreo en todas las etapas: producción, formulación, comercialización, importación y exportación.
- Establecer normas más estrictas de buenas prácticas agrícolas para proteger a trabajadores y comunidades, incluyendo zonas de exclusión en áreas habitadas, escolares y de uso colectivo.
- Unificar criterios sobre límites máximos de residuos en alimentos y garantizar sistemas de monitoreo público con participación de la sociedad civil.
- Regular la gestión de envases y residuos peligrosos, revisando prácticas como el triple lavado, cuya efectividad es cuestionada.
- Establecer marcos regulatorios para el *lobby* y prevenir conflictos de interés.
- Separar la comercialización de plaguicidas de los servicios de asesoría técnica.

### 2. Reforzar el monitoreo y la fiscalización

Requiere fortalecer las capacidades institucionales para garantizar el cumplimiento de las normas y proteger la salud pública y el ambiente. Ello involucra:

- Incrementar los recursos y capacidades técnicas de las autoridades competentes, asegurando su independencia frente a intereses corporativos.
- Mejorar la coordinación entre agencias sanitarias, ambientales, laborales y agrícolas, incorporando la participación de la sociedad civil.

- Promover servicios de asesoría técnica independientes, desvinculados de la venta de insumos.
- Implementar sistemas obligatorios y periódicos de monitoreo de residuos de plaguicidas en agua y alimentos, con resultados públicos y comparables.
- Desarrollar sistemas de vigilancia epidemiológica que permitan evaluar los impactos sanitarios del uso de plaguicidas.
- Fortalecer los mecanismos de sanción frente a incumplimientos.
- Involucrar a organizaciones de consumidores en procesos de certificación, trazabilidad y control.

### 3. Promover educación y acceso a la información

Se debe ampliar el conocimiento sobre los riesgos de los plaguicidas y las alternativas disponibles, fortaleciendo capacidades en todos los niveles. Para ello hay que:

- Impulsar investigaciones sobre los impactos de los plaguicidas y los aportes de la agroecología.
- Incorporar contenidos sobre agroecología, alimentación saludable y riesgos de plaguicidas en los sistemas educativos formales y no formales.
- Desarrollar campañas públicas sobre agroecología y alimentación saludable dirigidas a productores, consumidores, funcionarios y tomadores de decisión.

### 4. Impulsar la transición agroecológica

Se precisa promover políticas e incentivos que favorezcan sistemas agrícolas sostenibles, reduciendo progresivamente la dependencia de insumos químicos. Esto requiere:

- Definir e implementar una estrategia regional de transición agroecológica.
- Establecer incentivos económicos, técnicos y organizativos para productores y territorios agroecológicos.
- Promover la protección y el uso de semillas nativas, criollas y campesinas.
- Avanzar hacia la eliminación progresiva de organismos genéticamente modificados.
- Reconocer y proteger territorios libres de plaguicidas y transgénicos.

#### Lorenzo Soliz Tito

Investigador especializado en desarrollo rural con enfoque en comunidades campesinas e indígenas. Desde 2017 es miembro del IPDRS. Autor de libros, artículos y propuestas de políticas públicas sobre desarrollo rural.

[lsoliz@ipdrs.org](mailto:lsoliz@ipdrs.org)

#### Robin Villemaine

Agrónomo francés y doctor en Sociología. Ha trabajado varios años en el Perú y en el ámbito de la solidaridad internacional.

Entre 2018 y 2026 fue responsable del programa Tacsca en la región andina para la ONG CCFD-Terre Solidaire.

[robin.villemaine@gmail.com](mailto:robin.villemaine@gmail.com)

### Referencias

- Aldana Lucero, P., Soliz Tito, L., & Bazoberry Chali, O. (coords.). (2025). *Plaguicidas químicos de uso agrícola en países y territorios de la Comunidad Andina y el Mercosur*. IPDRS, Tacsca, CCFD-Terre Solidaire, Brot für die Welt, Humundi. <https://ipdrs.org/wp-content/uploads/2025/10/Plaguicidas-quimicos-de-uso-agricola-IPDRS-1.pdf>
- Baldi, I., Botton, J., Chevrier, C., Coumoul, X., Elbaz, X., Goujon, S., Jouzel, J.-N., Monnerieu, A., Multigner, L., Salles, B., Siroux, V., Spinosi, J., & Bortoli, S. (2021). *Pesticides et effets sur la santé*. Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale. [https://inserm.hal.science/inserm-03384960v1/file/Exp-coll\\_Pesticides\\_rapport.pdf](https://inserm.hal.science/inserm-03384960v1/file/Exp-coll_Pesticides_rapport.pdf)
- Bernhardt, E. S., Rosi, E. J., y & Gessner, M. O. (2017). Synthetic chemicals as agents of global change. *Frontiers in Ecology and the Environment*, 15(2), 84-90. <https://doi.org/10.1002/fee.1450>
- Castro-Vargas, S., Hernández Rodríguez, C., Navas, G., Castañón Ballivián, E., Xu, Y., & Marini, D. A. (2025). Pesticides and food sovereignty: (dis)connections and challenges for agrarian movements. *The Journal of Peasant Studies*. <https://doi.org/10.1080/03066150.2025.2549340>
- CCFD-Terre Solidaire, & Pollinis. (2021). *Pesticidas: un modelo que nos cuesta caro*. <https://ccfd-terresolidaire.org/wp-content/uploads/2022/04/Pesticidas-un-modelo-que-nos-cuesta-caroinforme.pdf>
- Deguine, J.-P., Aubertot, J.-N., Bellon, S., Côte, F., Lauri, P.-E., Lescourret, F., Ratnadass, A., Scopel, E., Andrieu, N., Bàberri, P., Becker, N., Bouyer, J., Brévault, T., Cerdan, C., Cortesero, A.-M., Dangles, O., Delatte, H., Yen Dinh, P. T., Dreyer, H., Duru, M.,... Lamichhane, J. R. (2023). Agroecological crop protection for sustainable agriculture. *Advances in Agronomy*, 178, 1-59. <https://doi.org/10.1016/bs.agron.2022.11.002>
- FoodFirst Information and Action Network (FIAN). (2020). *Agrotóxicos en América Latina: violaciones del derecho a la alimentación y a la nutrición adecuadas*. FIAN Brasil.
- Fundación Heinrich Böll, Amigos de la Tierra, & PAN Europa. (2023). *Atlas de los Pesticidas. Hechos y cifras sobre químicos tóxicos en nuestra agricultura*. <https://www.tierra.org/wp-content/uploads/2023/04/Atlas-pesticidas-Amigos-Tierra.pdf>
- Leenhardt, S., Mamy, L., Pesce, S., Sanchez, W., Achard, A.-L., Amichot, M., Artigas, J., Aviron, S., Barthélémy, C., Beaudouin, R., Bedos, C., Bérard, A., Berny, P., Bertrand, C., Bertrand, C., Betouille, S., Bureau-Point, E., Charles, S., Chaumot, A.,... Tournebize, J. (2022). *Impacts des produits phytopharmaceutiques sur la biodiversité et les services écosystémiques: Synthèse de l'expertise scientifique collective*. Inrae, Ifremer.
- Ratnadass, A., Deberdt, P., Martin, T., Sester M., & Deguine J.P. (2023). Impacts of Crop Protection Practices on Human Infectious Diseases – Agroecology as the Preferred Strategy to Integrate Crop Plant Health Zithin Extended “One Health” Framework. En M. Vithanage y Varad Prasad (ed.), *One Health Human, Animal, and Environment Triad*. Wiley.
- Salud con Lupa. (2025). *Cuatro monitoreos después, los pesticidas siguen en tu mesa*. <https://saludconlupa.com/noticias/cuatro-monitoreos-despues-los-pesticidas-siguen-en-tu-mesa/>
- Shattuck, A., Werner, M., Finn, M., Dunivin, Z., & Galt, R. (2023). Global pesticide use and trade database (GloPUT): New estimates show pesticide use trends in low-income countries substantially underestimated. *Global Environmental Change*, 81. <https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2023.102693>

# Del conflicto socioambiental al pago por servicios ecosistémicos: el caso de la laguna de Piuray y la ciudad del Cusco

JUAN VÍCTOR BÉJAR SAYA

## Introducción

Las comunidades que viven alrededor de la laguna Piuray, en el distrito de Chinchero, están ubicadas en la puerta de entrada al Valle Sagrado de los Incas. Rodeada por la cordillera de los Andes, posee un alto valor cultural y paisajístico, mientras que la laguna y sus ecosistemas proveen de agua a la ciudad del Cusco y a las zonas turísticas. En los últimos 40 años, la capital cusqueña ha experimentado un crecimiento exponencial y hoy constituye el motor turístico del país, recibiendo un promedio de dos millones de

turistas al año. A causa de ello, ejerce una creciente presión sobre los recursos hídricos de los territorios rurales, originando conflictos socioambientales entre las comunidades de la microcuenca de Piuray, la empresa que provee agua, entidades estatales y la propia ciudad. En paralelo, también han surgido soluciones a través de la implementación de mecanismos más justos de gestión.

Las principales actividades económicas en las comunidades son la agricultura y la ganadería, que en conjunción con el turismo comunitario y la producción

Mujer de la comunidad de Ocotuan evaluando la calidad del agua mediante macroinvertebrados (2022).

Fuente: Juan Víctor Bejar Saya.





Junta directiva del Comité de Gestión de la microcuenca Piuray Ccorimarca, gestión 2023-2025. ■ Fuente: Juan Víctor Bejar Saya.

artesanal han favorecido el desarrollo de las actividades económicas en la región. No obstante, hace más de dos décadas surgió un conflicto entre las comunidades de la microcuenca<sup>1</sup> y SEDACUSCO, una entidad prestadora de salud (EPS) encargada del abastecimiento de agua y saneamiento para la ciudad del Cusco. Este conflicto se originó por la pérdida de tierras y cultivos, atribuida tanto al fenómeno de El Niño como a la extracción de agua por parte de la empresa, lo que habría generado deslizamientos en la zona adyacente a la laguna.

Las comunidades demandan un acceso equitativo al agua, así como una retribución por su labor en la conservación de la laguna y sus ecosistemas. También exigen la implementación de un sistema adecuado de tratamiento de aguas residuales, cuya ausencia pone en riesgo la calidad del agua de la laguna Piuray y, en consecuencia, el abastecimiento hídrico de la ciudad del Cusco. Adicionalmente, se busca el

reconocimiento de los saberes campesinos o comunales —denominados «tecnologías andinas»— que han sido implementados a lo largo del tiempo para la protección y gestión sostenible del recurso hídrico y de los ecosistemas asociados a la laguna.

### **El sobreuso del agua en la microcuenca de Piuray y la movilización social**

La extracción de agua de la laguna de Piuray hacia la ciudad del Cusco tiene como antecedente los estudios realizados en 1937, orientados al aprovechamiento de los manantiales asociados a este sistema hídrico. Posteriormente, en 1970, se inició la explotación del recurso mediante la construcción de obras de captación y conducción.

Décadas más tarde, se originó el ya mencionado conflicto socioambiental entre las comunidades de la microcuenca y SEDACUSCO. Este se desencadenó a partir de dos eventos de colapso y deslizamiento de

1 Representadas por el Comité de Gestión de la Microcuenca Piuray-Ccorimarca (CGMCPCC), que representa a 18 comunidades.

---

## En esta etapa, el Comité planteó el concepto de «compensación por mantener y/o incrementar la calidad y cantidad de agua», entendido como un enfoque de gestión del recurso hídrico mediante el cual quienes conservan y protegen las fuentes de agua [...] reciben algún tipo de retribución

---

terrenos agrícolas y de pastoreo cercanos a la laguna, ocurridos en 1998 y en el año 2000. Dichos desastres afectaron más de 22 hectáreas, según lo reportado por el PRONAMACHCS-MIMA (2000), situación que derivó en un proceso de creciente tensión social entre las comunidades y la empresa que, posteriormente, dio lugar a espacios de diálogo y negociación.

Según el expresidente del CGMCPCC, Pedro Condori: «SEDACUSCO aumentó la extracción de la laguna de 250 a 280 litros de agua. Los peces

disminuyeron, la gente ya no podía pescar y las heladas aumentaron, por lo que perdimos los cultivos. Eso nos hizo reflexionar en que las instituciones solo buscan su propio interés».

A raíz de la crisis, las comunidades de la microcuenca iniciaron movilizaciones hacia la ciudad del Cusco el año 2000, lo que generó un clima de tensión entre estas y la EPS. Frente al sentimiento de despojo e injusticia que experimentaban, las comunidades exigieron una compensación por los terrenos colapsados, así como el reconocimiento de sus contribuciones a la conservación y el cuidado del agua mediante acciones como la construcción de terrazas, cercos vivos y zanjas de infiltración; la habilitación de procesos de forestación; y la instalación de infraestructura para el control de cárcavas. Estas intervenciones se desarrollaron bajo un enfoque de gestión de microcuenca con apoyo de programas de cooperación internacional y del Estado. A pesar de ello, la compensación por los terrenos deslizados no fue concedida.

Luego de un periodo de desatención por parte de los funcionarios de la empresa, en 2009 la Junta Directiva del CGMCPCC firmó un convenio de asesoramiento técnico y social con el Centro Bartolomé de Las Casas (CBC). Este acuerdo permitió iniciar un proceso de apoyo, acompañamiento técnico y social, y fortalecimiento de capacidades en gestión del agua dirigido a los líderes comunales, en el marco del proyecto Agua en Territorios Andinos financiado por la Unión Europea. En este contexto, y a partir del análisis del conflicto y de las demandas comunitarias, se desarrolló un estudio de caso (Guzmán León [comp.], 2021) impulsado desde el curso de Justicia Hídrica del CBC.

Líder y directivo Amilcar Escalante explica los mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos a pasantes de la región de Huancayo (2025). Fuente: Juan Victor Bejar Saya.





Reunión de negociación entre los miembros del Comité y funcionarios de SEDACUSCO (2012). ■ Fuente: CBC.

En el año 2012 se inició un nuevo proceso de diálogo entre el CGMCPCC, SEDACUSCO y el CBC, que asumió el rol de asesor del Comité, además de actuar como mediador y facilitador. En esta etapa, el Comité planteó el concepto de «compensación por mantener y/o incrementar la calidad y cantidad de agua», entendido como un enfoque de gestión del recurso hídrico mediante el cual quienes conservan y protegen las fuentes de agua —generalmente comunidades rurales—, reciben algún tipo de retribución o incentivo por dicho trabajo.

Este planteamiento estuvo acompañado de un plan de estrategias de negociación y de gestión de la microcuenca, lo que contribuyó a fortalecer y encauzar el proceso de diálogo. Ese mismo año, la Municipalidad Distrital de Chinchero se sumó a la iniciativa. En este contexto, se decidió tomar como referencia la experiencia de la ciudad de Moyobamba, en la región San Martín, donde ya se venía implementando con éxito un mecanismo financiero para la retribución de los servicios ecosistémicos hídricos<sup>1</sup>. Posteriormente, en abril de 2013, el CGMCPCC, SEDACUSCO y la

**Según el expresidente del CGMCPCC, Pedro Condori: «SEDACUSCO aumentó la extracción de la laguna de 250 a 280 litros de agua. Los peces disminuyeron, la gente ya no podía pescar y las heladas aumentaron, por lo que perdimos los cultivos»**

1 En Moyobamba, la empresa prestadora del servicio de agua potable asigna recursos por medio de la tarifa de uso doméstico para firmar acuerdos de conservación con las comunidades en la cuenca alta, mientras que el Comité Gestor es una plataforma de múltiples partes interesadas creada para supervisar el fondo y su gasto. Este caso pionero sirve como modelo para otros mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos (MRSE) en el país.



Deslizamiento de tierras en el sector de Pongobamba (2000). Fuente: Archivo MIMA.

---

**Esta norma marcó un hito clave en la institucionalización de la compensación por servicios hídricos. Sin embargo, en paralelo surgieron conflictos internos entre el CGMCPCC y la Municipalidad Distrital de Chinchero por la gestión de los fondos, lo que derivó en que SEDACUSCO asumiera su administración**

---

Municipalidad Distrital de Chinchero concretaron la firma de un convenio tripartito, con la presencia y el aval de la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass) como ente garante y del CBC como asesor del Comité.

Este convenio fue posteriormente incorporado en el Plan Operativo Institucional y en la estructura tarifaria de SEDACUSCO para el periodo 2013-2018, estableciendo un incremento tarifario del 4.8 % en los servicios de agua potable y alcantarillado, destinado a financiar proyectos orientados a reducir el riesgo de contaminación de la laguna de Piuray. Dicho monto se aplica mensualmente en cada recibo domiciliario de agua en la ciudad, en el marco de la modernización de los servicios de saneamiento de las EPS (Ley N.º 30045, 2013).

Esta experiencia sirvió como antecedente para la posterior promulgación de la Ley de Mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistémicos o MRSE (Ley N.º 30215, 2014), cuyo monto recaudado anualmente asciende a un aproximado de 1 300 000 nuevos soles (USD 351 000), provenientes del cobro mensual a los usuarios. Esta norma marcó un hito clave en la institucionalización de la compensación por servicios hídricos. Sin embargo, en paralelo surgieron conflictos internos entre el CGMCPCC y la Municipalidad Distrital de Chinchero por la gestión de los

fondos, lo que derivó en que SEDACUSCO asumiera su administración.

En 2015, la reglamentación de la ley consolidó este proceso, facultando a las EPS para gestionar, ejecutar y financiar proyectos de conservación hídrica. No obstante, hacia 2016 emergieron cuestionamientos comunales sobre la transparencia, la participación y la gestión de los recursos por parte de SEDACUSCO.

Finalmente, desde 2022 se observa una reactivación del rol de las comunidades, que buscan mayor participación en la gestión del fondo y en la implementación de proyectos, incorporando además enfoques de desarrollo sostenible como la agroecología, aunque aún de manera incipiente.

### La negociación y los aprendizajes

A partir de los conflictos y negociaciones con SEDACUSCO, las comunidades impulsaron una retribución justa por el uso del agua, incorporando medidas para reducir los impactos en sus medios de vida.

La experiencia de la microcuenca Piuray-Ccorimarca constituye un hito pionero que pasó del planteamiento del «canon por el agua» en 2013 a la implementación de un esquema de compensación por servicios ecosistémicos, contribuyendo a la promulgación de la Ley de MRSE en 2014. Este proceso reconoció el rol de las comunidades como protectoras de las fuentes hídricas y estableció un principio de reciprocidad con la ciudad.

La implementación evidenció limitaciones en la gestión, la transparencia y la participación comunal. Frente a ello, las comunidades han buscado fortalecer su rol y promover prácticas sostenibles como la agroecología.

El principal aprendizaje es que los MRSE requieren gobernanza efectiva, con reglas claras, participación real y transparencia, para consolidarse como instrumentos de sostenibilidad hídrica y justicia socioambiental.

### Reflexiones sobre las injusticias en torno al uso del agua

Los MRSE surgen de procesos de diálogo y negociación, por lo que deben adaptarse a las condiciones locales y no aplicarse como modelos estandarizados. En este sentido, el caso de Piuray representa una oportunidad para impulsar un modelo de desarrollo territorial integral que articule la conservación de ecosistemas, la agroecología, el fortalecimiento organizativo y la mejora de los servicios de saneamiento, generando además oportunidades económicas sostenibles.

Sin embargo, los territorios que abastecen de agua a las ciudades enfrentan múltiples presiones: aumento de la demanda urbana, contaminación, degradación de suelos, y pérdida de saberes locales por migración y cambios socioeconómicos. En Piuray, estos desafíos se suman a las tensiones históricas por el uso del agua.

## Los territorios que abastecen de agua a las ciudades enfrentan múltiples presiones: aumento de la demanda urbana, contaminación, degradación de suelos, y pérdida de saberes locales por migración y cambios socioeconómicos.

Frente a ello, las «tecnologías andinas» —como la siembra y cosecha de agua, la agroforestería y el manejo de suelos— son clave para la sostenibilidad hídrica y la resiliencia comunitaria, aportando bases concretas para la implementación de los MRSE y la adaptación al cambio climático.

En este contexto, el territorio debe asumirse como un espacio de aprendizaje colectivo que articula comunidades, Estado e investigadores. Asimismo, es fundamental fortalecer a las comunidades campesinas y garantizar su participación en la toma de decisiones, reconociéndolas como actores centrales en la gestión del agua. Solo así será posible enfrentar las desigualdades y avanzar hacia una verdadera justicia hídrica.

**Juan Víctor Béjar Saya**

Investigador vinculado al CBC con experiencia en gestión territorial, gobernanza del agua y conflictos socioambientales en el sur del Perú. Estudia las relaciones entre comunidades rurales, recursos naturales y políticas públicas con énfasis en enfoques de justicia hídrica y MRSE.  
[juanvictor.bejar@cbc.org.pe](mailto:juanvictor.bejar@cbc.org.pe)

### Referencias

- Guzmán León, A. (2021). Justicia hídrica, una mirada desde Latinoamérica. Centro Bartolomé de Las Casas. <https://cbc.org.pe/wp-content/uploads/2024/03/justiciahidricacbc.pdf>
- Ley N.º 30045, de Modernización de los Servicios de Saneamiento (Congreso de la República [Perú], 2013).
- Ley N.º 30215, de Mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistémicos (Congreso de la República [Perú], 2014).
- PRONAMACHCS-MIMA. (2000). *Informe técnico sobre deslizamientos en la microcuenca de Piuray*.
- SEDACUSCO. (2014). *Memoria anual 2014*. <https://www.sedacusco.com/transparencia/memoria/2014.pdf>
- Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass). (2018, 8 de septiembre). Fórmula y estructura tarifarias de SEDA S.A. para el quinquenio regulatorio 2019-2023. *El Peruano*, p. 38.



Actividad en el Encuentro Campesino por la Agroecología, realizado el 8 de junio de 2024. ■ Fuente: IMCA.

# Experiencia de construcción de la Política Pública de Agroecología en el municipio de Tuluá: un paso más hacia la territorialización de la agroecología

ANA CAROLINA OCHOA URIBE, OMAR GIOVANNY SÁNCHEZ QUINTERO

## Agroecología, una apuesta por la vida digna en el territorio

Cuenta la sabiduría popular campesina que «la cabeza no es solo para llevar sombrero», sino también para pensar y soñar con que las cosas pueden cambiar. Pero desear no es suficiente: también hay que actuar. Por eso, campesinas y campesinos que labran la tierra se organizan, se forman y se movilizan para llevar sus voces a espacios de decisión conquistados con esfuerzo. Ese impulso por transformar la realidad da sentido a

procesos como la construcción de políticas públicas, que buscan territorializar la agroecología y avanzar hacia territorios más sostenibles y en paz.

El suroccidente de Colombia ha sido escenario de importantes procesos de movilización social, política, cultural y ambiental en defensa de la vida. En este contexto se ubica el municipio de Tuluá, localizado entre el valle geográfico del río Cauca y la Cordillera Central, donde emerge una política pública construida desde las bases sociales de la

agroecología como resultado de una larga trayectoria organizativa.

En medio de la agudización del conflicto armado, especialmente entre los años 2000 y 2002, la agroecología surgió como una estrategia de pervivencia en el territorio. A partir de las escuelas campesinas de agroecología (ECA), concebidas como espacios pedagógicos y organizativos para la defensa del territorio mediante la recuperación y revalorización de saberes campesinos, las comunidades de Tuluá —con el acompañamiento de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente (Sedama) y la Corporación Surcos Comunitarios— impulsaron en 2003 experiencias como las ECA de San Lorenzo, Asoagros y San Rafael.

A partir de las dinámicas impulsadas por las ECA, se fue tejiendo una red de afectos, alianzas y acciones orientadas al fortalecimiento y empoderamiento de las comunidades campesinas. Este proceso permitió consolidar la agroecología como una estrategia de desarrollo endógeno sustentable orientada al «Vivir Bien». En dicho marco, se promovieron iniciativas económicas, ambientales, sociales, culturales y políticas integradas en los planes de vida de las comunidades y organizaciones, lo que ha contribuido al posicionamiento de la agroecología en el departamento del Valle del Cauca. Más allá de lo productivo, las ECA han sido espacios clave para la formación política, fortaleciendo una voz colectiva que interpela a instituciones públicas, privadas y organizaciones sociales en defensa de la permanencia en el territorio y la dignificación de la vida campesina.

Este proceso también implicó la articulación con otras formas de organización social, como las juntas

---

## Ese impulso por transformar la realidad da sentido a procesos como la construcción de políticas públicas que buscan territorializar la agroecología y avanzar hacia territorios más sostenibles y en paz

---

de acción comunal, lo que favoreció el surgimiento y fortalecimiento de liderazgos con capacidad de incidencia en espacios de participación local. Entre ellos se destaca el Consejo Municipal de Desarrollo Rural (CMDR), principal instancia de concertación entre comunidades rurales e institucionalidad pública en materia de desarrollo rural.

Fue precisamente en este escenario donde, en 2022, las organizaciones campesinas agroecológicas impulsaron un mandato para que el municipio de Tuluá avanzara en la construcción de una política pública de agroecología. Esta iniciativa buscaba generar condiciones de bienestar, sostenibilidad y reconocimiento de los saberes y las vidas campesinas.

Encuentro Campesino por la Agroecología, en el marco de la construcción de la Política Pública de Agroecología de Tuluá, realizado el 8 de junio de 2024. ■ Fuente: IMCA.



# Asimismo, se tomó como referencia la metodología del Plan Agroecológico Departamental del Valle del Cauca (Plaev), adaptando sus herramientas al contexto local

Detrás de esta propuesta hay una comprensión integral de la agroecología. No se trata únicamente de transformar las prácticas productivas, sino de responder a la necesidad urgente de proteger los territorios, preservar las dinámicas socioculturales y enfrentar los impactos del modelo de agricultura convencional y del conflicto armado, que han deteriorado tanto el tejido social como los bienes naturales.

Atendiendo a dicho escenario, este artículo presenta la experiencia de construcción de la Política Pública de Agroecología en el municipio de Tuluá desde

la perspectiva del Instituto Mayor Campesino (IMCA), organización que ha acompañado procesos de sostenibilidad territorial en la región. Este proceso refleja que la formulación de políticas públicas en agroecología responde a las particularidades de cada territorio y a la interacción de diversos actores, lo que define tanto su alcance como las estrategias para abordar las problemáticas y construir horizontes colectivos. Para ello, en este texto contamos cómo se llevó a cabo el proceso, qué se buscaba, hasta dónde llegó y qué aprendizajes dejó, con la idea de aportar a la planificación de la agroecología en el territorio.

## La metodología: un camino para recoger las voces y propuestas

Con el propósito de dar respuesta al mandato del Consejo Municipal de Desarrollo Rural, el IMCA, la Sedama y la Secretaría de Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca (SDRAP) del Valle del Cauca articularon esfuerzos para acompañar a las comunidades en la construcción de la política pública de agroecología. Este proceso inició en 2024, siguiendo el ciclo de gestión de políticas públicas e incorporando un enfoque participativo y territorial con el fin de garantizar su legitimidad y viabilidad. Para ello, se definieron cuatro fases: a) alistamiento, b) realización de talleres y encuentros comunitarios, c) validación y retroalimentación, y d) elaboración del documento técnico.

La fase de alistamiento incluyó la conformación de un grupo motor integrado por 12 personas de

Taller Zona Alta, construcción participativa de la Política Pública de Agroecología de Tuluá, realizado el 23 de marzo 2024.

■ Fuente: IMCA.



organizaciones campesinas, productores y mercados agroecológicos con amplio conocimiento del territorio. Este grupo desempeñó un papel central en la orientación del proceso, la definición de la metodología y la articulación con las instituciones. Su rol se inspira en la experiencia del IMCA en la formulación de planes de vida territorial mediante la metodología de Lectura Estratégica del Territorio.

Desde el grupo motor, como corazón del proceso y a partir de su conocimiento situado, se definió la ruta de trabajo, incluyendo el cronograma, la selección de los lugares donde se realizaron los espacios comunitarios y la identificación de las personas enlace en cada zona. Estos aspectos logísticos resultaron clave para asegurar la participación al reconocer los tiempos, dinámicas y condiciones propias de la ruralidad. La preparación de alimentos por parte de las comunidades, además, se constituyó en un ejercicio de soberanía alimentaria y valoración de los saberes locales.

Dada la extensión del municipio, se realizó una zonificación territorial (zona plana, media y alta) que permitió organizar seis puntos de encuentro —cinco rurales y uno urbano— para facilitar la participación desde las diferentes veredas. Asimismo, se tomó como referencia la metodología del Plan Agroecológico Departamental del Valle del Cauca (Plaev), adaptando sus herramientas al contexto local.

La segunda fase consistió en la realización de seis talleres territoriales, que contaron con la participación de aproximadamente 350 personas, entre campesinos, productores agroecológicos, consumidores y actores institucionales. En estos espacios se desarrollaron ejercicios participativos como mapeo de actores, líneas de tiempo, y análisis de problemáticas y soluciones, que permitieron identificar los principales retos, así como definir valores, principios, misión, visión y propuestas en torno a la agroecología.

La fase de validación se desarrolló mediante dos jornadas denominadas Encuentros Campesinos por la Agroecología, realizadas en las zonas plana y media con la participación de cerca de 80 representantes de las comunidades. Estos espacios se organizaron en tres momentos. En el primero, se presentaron los resultados de los encuentros comunitarios, lo que permitió reconocer avances y reflexionar sobre los alcances de las propuestas construidas. En un segundo momento, las y los participantes reafirmaron su apuesta por una agroecología que reivindica la vida comunitaria y la cultura campesina como base del buen vivir. Finalmente, se generó un espacio de carácter festivo en el que, a través de coplas, sainetes y canciones, el intercambio de semillas y saberes, y el compartir de alimentos preparados en ollas comunitarias, se celebró el camino recorrido. De manera complementaria, el grupo motor participó en la revisión y el ajuste de los contenidos sistematizados, garantizando una retroalimentación informada y colectiva.

---

## En el primero, se presentaron los resultados de los encuentros comunitarios, lo que permitió reconocer avances y reflexionar sobre los alcances de las propuestas construidas

---

Por último, la fase actual contempla la elaboración del documento técnico, que incluye el diagnóstico territorial, el componente estratégico, el presupuesto y las fuentes de financiación. Este proceso es liderado por la alcaldía y la gobernación con el fin de traducir las propuestas comunitarias al lenguaje de la planificación pública. Una vez concluido, el documento será presentado al Concejo Municipal para su debate y aprobación.

### La agroecología: una mirada más allá de lo productivo

Como resultado de este proceso, se construyó una propuesta que recoge no solo una apuesta de futuro en clave de sostenibilidad, sino también la experiencia acumulada por los procesos agroecológicos en el territorio a lo largo de varias décadas. La definición elaborada en los talleres da cuenta de una comprensión multidimensional e integral de la agroecología: «La agroecología es una herencia de vida que nace de las expresiones y creaciones de las comunidades campesinas, afro, indígenas y otros actores del territorio, que cultivan alimentos sanos y nutritivos, respetando la naturaleza y cuidando el bienestar de las familias productoras y consumidoras. La agroecología cuida las semillas criollas y nativas, los bienes naturales y el bienestar social, desde la autonomía, la conciencia, la soberanía y la suficiencia alimentaria. Es la identidad de los pueblos, que surge de saberes ancestrales y promueve una espiritualidad que cuida la vida, valora el rol de las mujeres y fomenta la equidad de género, el encuentro, el intercambio y la integración intergeneracional para alcanzar el buen vivir en los territorios».

El contenido programático de la política pública se organiza en cuatro dimensiones de la agroecología adoptadas en el Plaev: ecológica y técnica, histórico-cultural y espiritual, economías diversas, y político-organizativa e institucional. En conjunto, la política



Taller Zona Plana, realizado el 3 de marzo de 2024. Ahí se trabajó la construcción participativa de la Política Pública de Agroecología de Tuluá. Fuente: IMCA.

contempla 12 componentes, 25 líneas de acción, 35 programas y 78 iniciativas orientadas a recuperar los sistemas agroalimentarios, socioecológicos y bioculturales, promoviendo el cuidado de los bienes naturales y la reproducción de la vida económica y social de las comunidades desde formas de relacionamiento sustentables con el territorio.

Entre las iniciativas planteadas se encuentran el fomento de biofábricas, la implementación de estrategias como Territorio Escuela y Planes de Vida, la creación de espacios artísticos para la recuperación y divulgación de saberes locales, y la promoción de

ligas de consumidores agroecológicos. Estas propuestas reflejan la estrecha relación entre la agroecología y los procesos organizativos, así como su papel en la revalorización de saberes campesinos y en la revitalización de las dinámicas territoriales.

En este sentido, la política pública de agroecología en el municipio de Tuluá se proyecta como una alternativa para fortalecer la permanencia en el territorio. Más allá de una mirada técnico-productiva, plantea una apuesta por consolidar las dinámicas comunitarias, fortalecer los procesos organizativos y promover una reflexión colectiva sobre la relación entre la alimentación, el bienestar integral y el cuidado de la naturaleza.

---

**Se generó un espacio de carácter festivo en el que, a través de coplas, sainetes y canciones, el intercambio de semillas y saberes, y el compartir de alimentos preparados en ollas comunitarias.**

---

### **Aprendizajes y desafíos: un camino que se hace al andar**

Uno de los principales aprendizajes de esta experiencia es que sin organización no hay incidencia. La posibilidad de influir en la agenda pública es resultado de procesos previos de articulación comunitaria que definen horizontes colectivos a corto, mediano y largo plazo. En el caso de Tuluá, esto se refleja en la incorporación de la agroecología en la agenda social y política del municipio, impulsada por los liderazgos campesinos y comunitarios. En este mismo sentido, los procesos de formación han sido fundamentales para fortalecer las capacidades de las comunidades y enriquecer las propuestas construidas.

Un segundo aprendizaje es la importancia del diálogo social con enfoque multiactor. La articulación entre organizaciones de base, institucionalidad pública y organizaciones acompañantes permitió sumar capacidades técnicas, logísticas y económicas, favoreciendo la complementariedad y evitando la duplicación de esfuerzos. Este trabajo conjunto ha sido clave para dinamizar el proceso de construcción de la política pública.

Un tercer aspecto a destacar es que la agroecología trasciende la existencia misma de la política pública. En Tuluá, las comunidades continuarán desarrollando sus prácticas y procesos organizativos independientemente de su aprobación formal, ya que la agroecología hace parte de su historia, identidad y proyecto de vida. En este sentido, las políticas públicas pueden potenciar estos procesos, pero no los determinan.

En cuanto a los desafíos, uno de los principales es que la agroecología por sí sola no puede resolver las demandas estructurales del desarrollo rural. Su consolidación requiere condiciones relacionadas con el acceso a la tierra, la infraestructura, la conectividad, la educación rural y los mercados, lo que implica la articulación con otras políticas públicas y apuestas de desarrollo territorial.

Otro reto importante es la disponibilidad de recursos y la voluntad política para la implementación de la política pública. Contar con un documento aprobado no garantiza su ejecución; por ello, es fundamental asegurar la apropiación institucional, la asignación presupuestal y la articulación con los diferentes instrumentos de planificación del municipio.

### A manera de cierre

La trayectoria organizativa, la fortaleza de las iniciativas productivas y la dinámica de los mercados agroecológicos en Tuluá han sido el germen para la construcción de esta política pública, que se constituye, a su vez, en un reconocimiento a los procesos que la hicieron posible.

Esta experiencia confirma que lo más efectivo en la construcción de políticas públicas es lo participativo. Más allá del resultado técnico, el proceso en sí mismo se convirtió en un espacio de encuentro comunitario para revitalizar la memoria, reflexionar sobre el presente y proyectar un futuro en el que mujeres y jóvenes campesinos tengan un papel protagónico en la transformación de sus territorios.

En este camino, el rol de las organizaciones acompañantes ha sido el de facilitar, articular y fortalecer los procesos comunitarios sin sustituir su protagonismo. Se trata de construir puentes entre las comunidades, la institucionalidad y la academia en función de objetivos compartidos.

De cara al futuro, es fundamental avanzar en la aprobación de la política pública como Acuerdo municipal y, sobre todo, en su apropiación por parte de las organizaciones campesinas, indígenas y

## Entre las iniciativas planteadas se encuentran el fomento de biofábricas, la implementación de estrategias como Territorio Escuela y Planes de Vida, la creación de espacios artísticos para la recuperación y divulgación de saberes locales, y la promoción de ligas de consumidores agroecológicos.

afrodescendientes. Esto permitirá que se consolide como una herramienta para mejorar las condiciones de vida y fortalecer la permanencia en el territorio.

En este horizonte, la agroecología se proyecta como una vía para la transformación de la ruralidad, enraizada en prácticas que articulan la vida familiar, comunitaria, productiva y organizativa. Así, la política pública del municipio de Tuluá recoge los sueños y apuestas de las comunidades, sembrados a lo largo de este proceso colectivo, y se perfila como una oportunidad para seguir construyendo un territorio en paz y orientado al buen vivir.

**Ana Carolina Ochoa Uribe**

Parte del Equipo de Promoción Social del IMCA.

[ana.carolina@imca.org.co](mailto:ana.carolina@imca.org.co)

**Omar Giovanni Sánchez Quintero**

Parte del Equipo de Promoción Social del IMCA.

### Referencias

- Ley 2294, por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026, «Colombia Potencia Mundial de la Vida 2022-2026» (Presidencia de la República [Colombia], 19 de mayo de 2023).
- Ley 101, Ley General de Desarrollo Agropecuario y Pesquero (Congreso de la República [Colombia], 23 de diciembre de 1993).
- Ordenanza 656, por medio de la cual se adopta el Plan Agroecológico Departamental del Valle del Cauca 2024-2035 (Gobierno del Departamento del Valle del Cauca [Colombia], 2024).
- Resolución 331 de 2024, por la cual se adopta la Política Pública de Agroecología y se dictan otras disposiciones (MADR [Colombia], 28 de noviembre de 2024).

# La Autonomía Guaraní Charagua Iyambae y su caminar hacia el *Yaiko Kavi Päve* («Vivir Bien»)

JUAN MIGUEL SUÁREZ AUGSTEN

La Autonomía Guaraní Charagua Iyambae, ubicada en la región chaqueña del departamento de Santa Cruz, Bolivia, es un referente en la lucha por el autogobierno: se trata del primer gobierno autónomo indígena originario campesino del país. Su institucionalización es resultado de un histórico y largo proceso de lucha, que aún continúa como referente y estrategia hacia la reconstitución territorial en su caminar hacia el *luḱ Maraëḱ* («Tierra Sin Mal») para el *Yaiko Kavi Päve* («Vivir Bien»). Esta trayectoria de lucha tiene raíces profundas. El pueblo guaraní ha sido y es protagonista

en la defensa del territorio, los recursos naturales, el agua y la autodeterminación, con una participación clave en las marchas reivindicatorias históricas de 1990 y 1992 por el territorio y la dignidad. Este recorrido también se expresó en la Asamblea Constituyente, donde logró incorporar sus propuestas en la Nueva Constitución Política del Estado (2009).

Siendo un municipio todavía, Charagua inició su transición hacia la autonomía indígena con el referéndum de diciembre de 2009. Posteriormente, aprobó su Estatuto Autonómico en septiembre de 2015 y enero

Huerto agroecológico Celso Herrera, en la comunidad de Igmiri. ■ Fuente: Archivo CIPCA Cordillera.



de 2017, y sus primeras autoridades tomaron posesión. Desde entonces, el nuevo gobierno funciona junto a la población, recogiendo en su estatuto el *ñandereko* («modo de ser guaraní») y su estrecha relación con la naturaleza como base de su visión de desarrollo.

### La planificación en la autonomía: del *Yaiko Kavi Päve* al plan anual zonal (PAZ)

El camino hacia el *Yaiko Kavi Päve* en la Autonomía Guaraní Charagua Iyambae se da a través de un proceso planificado, donde se establecen acciones o tareas a realizar con procedimientos apropiados para alcanzar objetivos y metas. Por tanto, es pensar en el futuro, pero actuando desde ahora, teniendo siempre en cuenta la situación actual y los factores internos y externos que pueden influir en el logro del objetivo.

Es así que el modelo de gestión de la Autonomía Guaraní Charagua Iyambae, orientado por el principio del *Yaiko Kavi Päve*, plantea una forma de desarrollo basada en el equilibrio entre la vida comunitaria y la naturaleza. Cabe indicar que este principio no se queda en el plano conceptual, sino que se traduce en herramientas concretas de planificación.

La planificación en el gobierno indígena guaraní de Charagua Iyambae no está exenta del Sistema de Planificación Integral del Estado Boliviano (SPIE), sino

---

**La implementación de la autonomía Charagua Iyambae no solo ha implicado la creación de nuevas estructuras institucionales, sino también transformaciones importantes en la forma de tomar decisiones y gestionar el territorio**

---

Feria productiva agroecológica y artesanal en Charagua Iyambae. ■ Fuente: Archivo CIPCA Cordillera.





Apicultores de Charagua Iyambae. Fuente: Archivo CIPCA Cordillera.

---

**Esta trayectoria de lucha tiene raíces profundas. El pueblo guaraní ha sido y es protagonista en la defensa del territorio, los recursos naturales, el agua y la autodeterminación, con una participación clave en las marchas reivindicatorias históricas de 1990 y 1992 por el territorio y la dignidad**

---

que más bien incorpora su propio sistema de planificación territorial mediante el plan anual zonal (PAZ), el cual se convierte en el más importante pues organiza las prioridades y acciones de cada una de sus zonas, desde las comunidades hacia el conjunto del territorio.

El PAZ introduce una característica clave: se construye desde las bases. Su elaboración comienza en las asambleas comunales (*Ñemboatimi*), donde se identifican necesidades y se plantean demandas. Posteriormente, en asambleas zonales (*Ñemboati*), estas demandas se priorizan y se definen los proyectos que serán ejecutados durante la gestión.

En este proceso participan las comunidades, las autoridades zonales y representantes de las instancias de gobierno, junto con organizaciones sociales e instituciones de sectores como salud, educación y otros. De este modo, la planificación articula distintos niveles, pero mantiene como eje central la decisión colectiva.

El PAZ no solo orienta la acción pública, sino que también permite hacer seguimiento a los compromisos asumidos. Además, su implementación se vincula con otros instrumentos de planificación, como el plan operativo anual (POA), lo que facilita la asignación de recursos y la ejecución de proyectos.

Por otro lado, la evaluación y la rendición de cuentas son parte fundamental de este sistema. Las autoridades zonales deben informar periódicamente sobre

el cumplimiento de objetivos y el uso de los recursos, lo que fortalece la transparencia y el control social desde las propias comunidades.

### La visión política de desarrollo de Charagua Iyambae

En el marco de su Estatuto Autonómico, Charagua Iyambae ha construido una visión política de desarrollo orientada por el *Yaiko Kavi Päve*, entendido como una forma de vida basada en el equilibrio entre las personas, la comunidad y la naturaleza. Este enfoque se traduce en una propuesta de gobernanza territorial que incorpora principios de sostenibilidad y responsabilidad intergeneracional.

A partir de esta visión, la autonomía ha definido una serie de ejes estratégicos —como recursos naturales, tierra y territorio, producción, salud, educación, infraestructura, turismo y gestión pública— que orientan la formulación de políticas públicas, programas y proyectos. Estos ejes permiten organizar la acción pública en función de las prioridades del territorio, manteniendo coherencia con la cosmovisión guaraní.

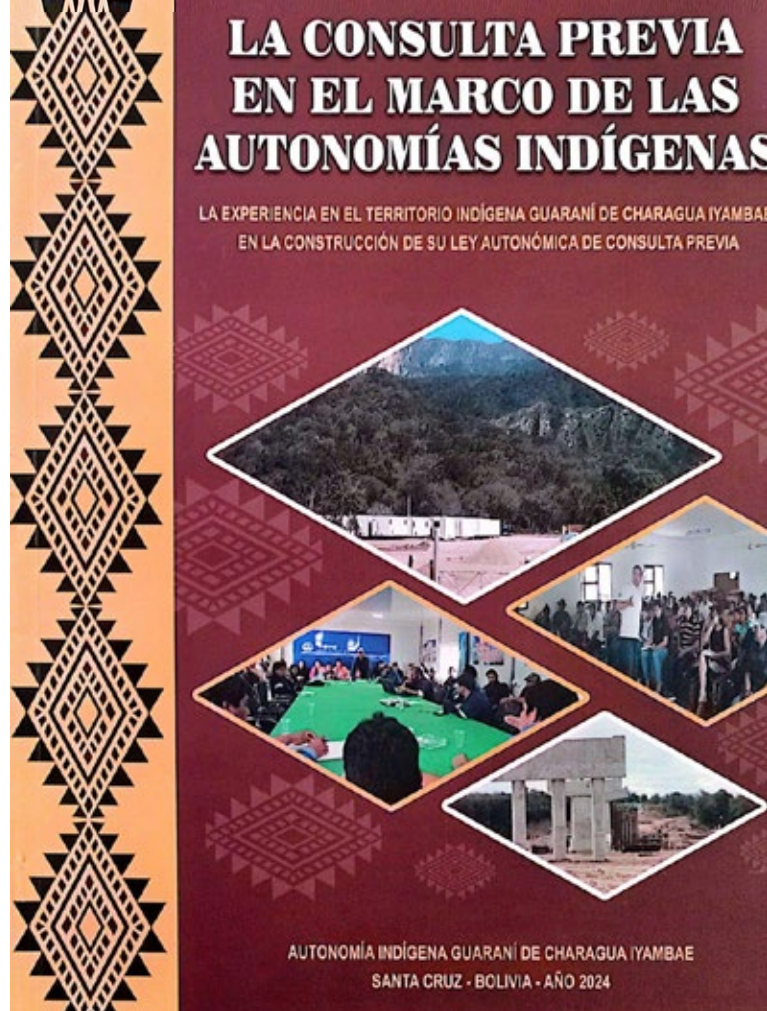
En este proceso, se han desarrollado normas y herramientas orientadas a fortalecer la gestión territorial, la protección del medio ambiente y el impulso a iniciativas productivas. Entre ellas se encuentran regulaciones vinculadas a la consulta previa, la conservación de áreas protegidas, la protección de semillas nativas, el fomento a la producción agroecológica y otras iniciativas que buscan articular desarrollo económico amigable con la naturaleza y sostenibilidad.

La «Visión de Desarrollo» (*Mbaiu Mbaeyekou Regua*) no se limita a un enfoque sectorial, sino que busca integrar distintas formas de organización económica —comunitaria, estatal, privada y social-cooperativa— en función de un desarrollo equilibrado. En este sentido, la propuesta de Charagua Iyambae no solo apunta al crecimiento económico, sino también al fortalecimiento de la vida comunitaria, la soberanía alimentaria y la relación armónica con el entorno.

De esta manera, la visión política de desarrollo se convierte en un marco orientador para la planificación y la gestión pública, expresándose en instrumentos concretos —como el PAZ— que articulan las decisiones del territorio en dirección al *Yaiko Kavi Päve vaera* («Para que todos vivan bien»).

### Dificultades y avances de la Autonomía Guaraní Charagua Iyambae en su camino al *Yaiko Kavi Päve vaera*

En primer lugar, es importante considerar que, aunque existe una visión política de desarrollo construida desde las bases —que articula tanto dimensiones conceptuales como operativas del *Yaiko Kavi Päve*—, esta incorpora también a los sectores urbanos como parte del desarrollo territorial. En este sentido, los programas, políticas públicas y proyectos que se impulsan



Visibilización del trabajo colectivo en la construcción de la Ley Autonómica de Consulta Previa. Fuente: Archivo CIPCA Cordillera.

responden a una lógica inclusiva, orientada a toda la población y basada en las necesidades priorizadas desde la planificación territorial.

Como en todo proceso innovador, el camino hacia el *Yaiko Kavi Päve* ha enfrentado diversas dificultades. Una de las principales ha sido la transición desde el sistema municipal, particularmente en lo referido a la transferencia de activos, documentación y responsabilidades administrativas. Aunque la autonomía implica autogobierno, este se ejerce aún bajo marcos normativos y operativos heredados del sistema municipal, lo que limita la plena implementación de una visión propia de desarrollo.

A ello se suma que, si bien la autonomía cuenta con competencias exclusivas que le permiten tomar decisiones sobre temas estratégicos, estas no siempre están acompañadas de los recursos económicos necesarios. Asimismo, el sistema de planificación estatal mantiene estructuras presupuestarias que dificultan la incorporación de enfoques propios, lo que representa un desafío constante para la gestión y la gobernanza territorial.

A pesar de estas limitaciones, se han logrado avances significativos, especialmente en la gestión del territorio y los recursos naturales. Uno de los más destacados es la ampliación de áreas protegidas dentro de la jurisdicción de Charagua Iyambae, que ha pasado de contar con dos áreas de carácter nacional a consolidar

---

## El camino hacia el *Yaiko Kavi Pãve* ha enfrentado diversas dificultades. Una de las principales ha sido la transición desde el sistema municipal, particularmente en lo referido a la transferencia de activos, documentación y responsabilidades administrativas

---

un sistema más amplio de conservación territorial, con seis áreas que abarcan el 76 % del territorio de Charagua. En la actualidad, estas áreas cubren una parte sustantiva del territorio, fortaleciendo la gobernanza ambiental y la protección de ecosistemas clave.

Este proceso ha estado acompañado por el desarrollo de normativa específica, como la Ley Autonomica de Áreas Protegidas promulgada en julio de 2024, que establece lineamientos para la conservación de la biodiversidad y la gestión sostenible del territorio, articulando la protección ambiental con las dinámicas de vida de las comunidades.

Asimismo, la defensa del territorio se ha fortalecido a través de instrumentos como la Ley Autonomica de Consulta Previa de agosto de 2018, que garantiza la

participación de la población en la toma de decisiones frente a proyectos o medidas que puedan afectarles. En esta línea, se han impulsado acciones legales frente a instancias nacionales para frenar asentamientos irregulares en áreas protegidas, logrando fallos favorables que refuerzan la protección territorial.

Otro ámbito clave ha sido la gestión del agua, históricamente central en el Chaco boliviano. Para ello, se han desarrollado acciones de defensa y conservación de fuentes hídricas, incluyendo iniciativas articuladas entre distintas zonas para la protección del río Parapetí mediante actividades de reforestación, monitoreo y gestión conjunta de las cuencas.

En otros ejes estratégicos también se registran avances. En educación, se han promovido iniciativas para incorporar contenidos vinculados a la autonomía y fortalecer la lengua y cultura guaraní. En salud, se ha planificado desarrollar diagnósticos territoriales que permitan mejorar el sistema de salud desde el nivel territorial. En producción, se han impulsado normativas para mejorar las prácticas agroecológicas y el aprovechamiento sostenible del territorio. En turismo, se han elaborado diagnósticos zonales que han permitido elaborar lineamientos estratégicos para el desarrollo del turismo sostenible en la entidad territorial. En infraestructura, se han mejorado las vías de acceso y se están gestionando proyectos para fortalecer la conectividad territorial.

En conjunto, estos avances muestran que, si bien el proceso autonómico enfrenta limitaciones estructurales, se encuentra en una etapa de consolidación progresiva en la que la planificación desde las bases, la gestión territorial y la gobernanza ambiental están permitiendo materializar, de manera gradual, la visión política de desarrollo hacia el *Yaiko Kavi Pãve*.

### Cambios en la forma de gobernar y gestionar el territorio

La implementación de la autonomía en Charagua Iyambae no solo ha implicado la creación de nuevas

Entrega de acreditación de las primeras autoridades de la Autonomía Indígena Guaraní de Charagua Iyambae.

■ Fuente: Archivo CIPCA Cordillera.





Autoridades orgánicas de la comunidad de Caipepe, Charagua Iyambae.

■ Fuente: Archivo CIPCA Cordillera.

estructuras institucionales, sino también transformaciones importantes en la forma de tomar decisiones y gestionar el territorio.

Uno de los cambios más significativos es la elección de autoridades según normas y procedimientos propios. Este mecanismo ha reducido el protagonismo de los partidos políticos y ha fortalecido las formas de organización comunitaria. En dicho marco, se promueve la participación equitativa de mujeres y hombres, incorporando criterios de paridad y alternancia en los espacios de decisión.

Otro aspecto central es la reorganización de la estructura de gobierno. A diferencia del modelo municipal, donde las decisiones se concentran en la figura del alcalde, en Charagua Iyambae la máxima autoridad radica en las bases, organizadas en asambleas. Son estas instancias colectivas las que definen el rumbo del territorio, mientras que las autoridades ejecutivas y legislativas cumplen funciones orientadas a implementar esas decisiones.

En este contexto, la planificación estratégica adquiere un carácter distinto. Al construirse desde las comunidades, permite que las decisiones respondan de manera más directa a las necesidades del territorio. Esto no solo mejora la asignación de recursos, sino que también fortalece el control social, ya que la población conoce de cerca los proyectos, su ejecución y los resultados alcanzados.

Asimismo, la autonomía ha permitido avanzar en la definición de políticas públicas propias, alineadas

con su visión de desarrollo. Estas políticas buscan no solo dinamizar la economía local, sino también proteger el territorio, fortalecer la gobernanza ambiental y promover formas de producción sostenibles, en coherencia con la cosmovisión guaraní.

En conjunto, estos cambios reflejan una manera distinta de entender la gestión pública: más participativa, más territorializada y basada en la construcción colectiva de decisiones. Si bien el proceso aún enfrenta desafíos, ha sentado bases importantes para avanzar hacia una forma de desarrollo que busca mejorar las condiciones de vida de la población en equilibrio con su entorno.

**Juan Miguel Suárez Augsten**

Especialista en ciencias sociales y ambientales. Responsable de la Unidad de Organización e Incidencia de CIPCA regional Cordillera y de la oficina de CIPCA Charagua. Asesor de la Coordinadora Nacional de Autonomías Indígenas de Bolivia.

[jsuarez@cipca.org.bo](mailto:jsuarez@cipca.org.bo)

## Referencias

- Estatuto Autonómico (Gobierno Autónomo Charagua Iyambae [Bolivia], septiembre de 2015).
- Ley Autonómica de Áreas Protegidas (Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz [Bolivia], julio de 2024).
- Ley Autonómica de Consulta Previa (Gobierno Autónomo Charagua Iyambae [Bolivia], agosto de 2018).
- Nueva Constitución Política del Estado (Presidencia de la República [Bolivia], 2009).

**El escalamiento profundo como dimensión crítica de la transición agroecológica: evidencia conceptual desde la experiencia de mujeres rurales en el Perú**

Mendiola Vargas, C. (2026). Perú: Consorcio Agroecológico Peruano. <https://consorcioagroecologico.pe/pdf/EI%20escalamiento%20profundo%20como%20dimensio%CC%81n%20cri%CC%81tica%20de%20la%20transicio%CC%81n%20agroecolo%CC%81gica%20formato%20abc%202%20cap.pdf>

La literatura sobre escalamiento agroecológico ha avanzado en la distinción entre escalamiento horizontal (difusión territorial de prácticas) y escalamiento vertical (institucionalización en políticas públicas); sin embargo, numerosos procesos de transición agroecológica presentan discontinuidades o retrocesos, incluso cuando logran expansión territorial o reconocimiento institucional. Este artículo propone el concepto de escalamiento profundo como una tercera dimensión crítica, entendida como la transformación de sujetos, valores, prácticas cotidianas y relaciones socioecológicas que sostienen la permanencia de estos sistemas en el tiempo.

**Las transiciones agroecológicas: múltiples escalas, niveles y desafíos**

Tittonell, P. A. (2019). Argentina: Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Cuyo. <https://revistas.uncu.edu.ar/ojs3/index.php/RFCA/article/view/2448/1765>

Transitar hacia una producción de alimentos sostenible a partir de los principios de la agroecología implica no una, sino múltiples transiciones simultáneas, que se desarrollan en distintas escalas, niveles y dimensiones: social, biológica, económica, cultural, institucional y política. En este artículo se propone el uso de diferentes

marcos conceptuales, derivados de la ecología, la agronomía y la ciencia de la innovación, para describir y comprender estos procesos.

**Hacia una hoja de ruta para el escalamiento de la agroecología en Perú: un análisis de las políticas, programas y factores limitantes actuales**

Valdivia-Díaz, M., & Le Coq, J.-F. (2021). Perú: Programa de investigación del CGIAR en Cambio Climático, Agricultura y Seguridad Alimentaria (CAAFS), y Centro Internacional de Agricultura Tropical (actual Alianza Bioersivity-CIAT). [https://agritrop.cirad.fr/607576/1/InformeFinalPer%3BA\\_2021\\_W5.pdf](https://agritrop.cirad.fr/607576/1/InformeFinalPer%3BA_2021_W5.pdf)



Este estudio se enfoca en la identificación de barreras y oportunidades para la promoción de la agroecología desde las políticas públicas. Propone una hoja de ruta en la que los diversos actores vinculados al sistema alimentario comparten sus experiencias y percepciones no solo sobre las limitaciones, sino también sobre las oportunidades para avanzar en el escalamiento de la agroecología en el Perú.

**Transiciones sustentables en ciudades: diálogo de saberes y agroecología urbana en San Carlos de Bariloche, Río Negro, Argentina**

Mattioli, D., De Paz, M., Garibaldi, L. A., Giustiniani, E., & Giovanetti Ferreirom, M. P. (2025). *Revista Kawsaypacha: Sociedad y Medio Ambiente*, (16). Perú. <https://revistas.pucp.edu.pe/index.php/Kawsaypacha/article/view/30468>



La gestión de los sistemas socialimentarios representa un desafío creciente ante la expansión de la frontera urbana y productiva. La agroecología ofrece herramientas para su rediseño, combinando principios ecológicos, económicos y sociales. Este trabajo analiza una experiencia de diálogo de saberes entre universidad, Estado y comunidad en San Carlos de Bariloche orientada a promover la agroecología en huertas urbanas, y destaca la importancia del fortalecimiento de capacidades locales para impulsar transiciones sustentables en contextos urbanos.

**Acción colectiva para la transición agroecológica en el altiplano boliviano**

Carrasco-Torrontegui, A., Quispe, Ma., Pardo, R., Apaza, M., Cota, R., Bucini, G., Gallegos, C. A., Anderson, C., Caswell, M., & Mendéz, E. (2024). *Transitions en débat dans les Amériques*, (232). <https://journals.openedition.org/orda/10480>



Promover una transición agroecológica requiere tanto de acción individual como colectiva, que se consolida cuando los actores articulan una visión común. Bajo la premisa de que «sin acción colectiva no hay transiciones agroecológicas», este trabajo analiza dinámicas sociales, ambientales y productivas en territorios comunales de tres comunidades aymaras del altiplano boliviano: Chigani Alto, Villa Anta y Cebollullo.

### Escalamiento de la agroecología desde el huerto escolar y la importancia de reconocer la cultura, los alimentos y lugar

Morales, H., Ferguson, B. G., Chung, K., & Nigh, R. (2021). *Desenvolvimento E Meio Ambiente*, 58. México.

<https://revistas.ufpr.br/made/article/view/81460>



Este trabajo explora el potencial y las limitaciones del escalamiento de la agroecología a través de estructuras educativas formales,

tomando como estudio de caso el programa de huertos escolares LabVida en Chiapas, México. Si bien los docentes desarrollaron una mayor valoración de la agroecología y la aplicaron en sus prácticas, persistieron limitaciones en la comprensión de sus principios y del proceso científico. El mayor impacto se observó en los hábitos alimentarios y en la revalorización del conocimiento local.

### Escalamiento de la agroecología: impulsores clave y casos emblemáticos

Mier y Terán Giménez-Cacho, M., Giraldo, O. F., Aldasoro, M., Morales, H., Ferguson, B. G., Rosset, P., Khadse, A., & Campos, C. (2019). Cuaderno de trabajo N.º 1. Grupo en Masificación de la Agroecología. México.

<https://www.ecosur.mx/masificacion-agroecologia/wp-content/uploads/sites/16/2019/06/Escalamiento-de-la-agroecolog%C3%ADa.pdf>

Este estudio busca contribuir a la comprensión teórica del escalamiento agroecológico a partir del análisis de cinco casos emblemáticos de masificación en el mundo. A través de estos, se identifican impulsores clave que permiten que la agroecología trascienda experiencias locales, entre ellos el reconocimiento de una crisis, la organización social, los procesos de aprendizaje, las prácticas efectivas, los discursos movilizadores, los aliados externos, los mercados favorables y las oportunidades políticas.

### Transiciones agroecológicas en comunidades rurales de México

Macías, A., Fletes, H. B., & Madera, J. J. A. (coords.). (2025). Comunicación Científica. Ciudad de México.

[https://comunicacion-cientifica.com/wp-content/uploads/2025/09/263\\_PDF\\_Transiciones-agroecologicas-en-comunidades-rurales-de-Mexico.pdf](https://comunicacion-cientifica.com/wp-content/uploads/2025/09/263_PDF_Transiciones-agroecologicas-en-comunidades-rurales-de-Mexico.pdf)

Los distintos capítulos de esta obra recogen experiencias diversas de transición agroecológica en comunidades



rurales, caracterizadas por el uso de metodologías participativas y el diálogo de saberes entre actores. Los casos muestran tanto avances como dificultades, evidenciando que no existe un modelo único de transición, sino múltiples caminos definidos por las particularidades de cada territorio y de las personas que se involucren en ello.

### Redes alimentarias alternativas en procesos de transición y escalamiento de las agroecologías

Rosas-Domínguez, A., Piñar-Álvarez, M. A., Escalona-Aguilar, M. Á., & Valdés-Rodríguez, O. A. (2024). *Regions and Cohesion*, 14(1), 1-32.

<https://www.berghahnjournals.com/view/journals/regions-and-cohesion/14/1/reco140102.xml>

Las Redes Alimentarias Alternativas (RAA) son innovaciones sociales que integran la producción, distribución y consumo de alimentos con valores agroecológicos. Aunque tienen potencial para facilitar la transición y el escalamiento de las agroecologías, este aspecto ha sido poco estudiado. La investigación analiza las contribuciones y barreras multidimensionales de las RAA en estos procesos a nivel internacional, identificando 17 categorías que promueven la transición y el escalamiento agroecológico, entre las que destacan la cooperación, la articulación entre producción y consumo, y la existencia de políticas públicas favorables.

### Grupo de Investigación sobre la Masificación de la Agroecología

<https://www.ecosur.mx/masificacion-agroecologia/>



La masificación, el escalamiento o la territorialización de la agroecología se han vuelto indispensables frente a la necesidad de transformar el sistema agroalimentario, responder a la crisis ambiental y social, y fortalecer los mundos campesinos en la construcción de sociedades más justas. Este grupo de investigación busca comprender los procesos socioambientales que permiten ampliar la agroecología a nivel territorial; es decir, que llegue a más familias y que los alimentos producidos bajo estos principios sean accesibles para más personas. Su sitio web ofrece acceso a libros, informes, artículos y cuadernos de trabajo.

### Colectiva Agroecológica de Masificación y Unidad (CAMU)

<https://www.camu-pr.org/>



CAMU es un colectivo de base con presencia en las regiones oeste y sur de Puerto Rico. Promueve la formación agroecológica desde un enfoque práctico, político e interseccional, con el objetivo de fortalecer la soberanía alimentaria, el tejido comunitario y la defensa del territorio. Asimismo, impulsa la articulación de redes dentro del movimiento agroalimentario a nivel local y global. Su sitio web incluye material audiovisual con testimonios de experiencias agroecológicas.

### La Iniciativa para Ampliar la Escala de la Agroecología

<https://www.fao.org/agroecology/overview/scaling-up-agroecology-initiative/es/>

Esta plataforma global, impulsada en el marco del sistema de Naciones Unidas, busca promover la cooperación internacional para fortalecer la agroecología. A través de esta iniciativa, los países y socios participantes articulan capacidades técnicas y políticas para acompañar procesos nacionales, generando sinergias y oportunidades para ampliar la escala de la agroecología.

### Centro Latinoamericano de Investigaciones Agroecológicas (Celia)

<https://celia.agroeco.org/home/>



Celia es un centro «sin murallas» que promueve la investigación transdisciplinaria en agroecología para el diseño de sistemas agrícolas biodiversos, productivos y resilientes en América Latina. A partir de una amplia red de colaboración con investigadores, organizaciones campesinas y agricultores, desarrolla proyectos de investigación, formación y publicaciones, integrando saberes tradicionales con conocimientos científicos para apoyar el escalamiento de la agroecología en la región.

### Portal de Gestión del Conocimiento Agroecológico de Latinoamérica

<https://agroecologialatam.org/>

Este portal es un espacio de intercambio de conocimientos, experiencias y prácticas en agroecología en América Latina. Ofrece acceso a documentos, materiales audiovisuales, reportes científicos y sistematizaciones, contribuyendo a la socialización de saberes provenientes tanto de la investigación como de las experiencias de organizaciones y conocimientos ancestrales.

## Material audiovisual

### **La transición agroecológica, paso a paso**

<https://www.youtube.com/watch?v=i7UWn49EyU8>

Este video presenta la experiencia de Juan Khier, productor agroecológico de Buenos Aires (Argentina), quien ha incorporado principios de manejo agroecológico en su predio. Tras más de dos décadas, su experiencia destaca como un modelo de estabilidad productiva y económica, y forma parte de las 50 experiencias reconocidas a nivel mundial por la FAO.



### **Investigación participativa: tejiendo un camino latinoamericano hacia a la agroecología**

<https://www.youtube.com/watch?v=OALs1UG-rgI>

El video recoge experiencias de investigación participativa en agroecología desarrolladas por colectivos de México, Guatemala, Nicaragua, Cuba, Colombia, Ecuador y Perú. Fue registrado en el marco de la segunda reunión del Colectivo Regional de Investigación Participativa en Agroecología de América Latina y el Caribe (IPA-LAC), realizada en junio de 2024.



### **En diálogo con la agroecología: la circulación de saberes y la socialización de experiencias en el campo y la ciudad**

<https://www.youtube.com/watch?v=aoUJFMHijAQ>

Este documental visibiliza experiencias agroecológicas en la localidad de Lincoln y el cordón frutihortícola de La Plata, en Argentina. A través de distintos actores —productores, productoras y poblaciones urbanas—, muestra cómo, pese a trayectorias diversas, se construyen procesos compartidos de intercambio de saberes y aprendizaje colectivo orientados a la transformación social.



# Año Internacional de la Agricultora



AÑO INTERNACIONAL DE LA  
**AGRICULTORA**  
2026

Este 2026 ha sido proclamado Año Internacional de la Agricultora por la Asamblea General de las Naciones Unidas en reconocimiento al papel crucial de las agricultoras en la seguridad alimentaria, el desarrollo sostenible y la lucha contra la pobreza.

Las agricultoras sostienen los sistemas agroalimentarios del mundo, por lo que es indispensable abordar los desafíos estructurales que enfrentan, como el acceso desigual a la tierra, al crédito, a la tecnología y a la capacitación.

Mujeres campesinas, productoras, agricultoras familiares, jóvenes, mayores, indígenas, con discapacidad, refugiadas y desplazadas: todas forman parte de esta fuerza que alimenta, cuida y transforma nuestros territorios.



Cecilia Gianella.

# Guía para autores/as

## Sobre el contenido

- La información y las experiencias presentadas en la revista deben posibilitar a las y los lectores reconocer situaciones que permitan la aplicación del potencial de información y conocimiento ofrecidos por el enfoque agroecológico.
- Los artículos deben ser escritos en un estilo claro y muy legible, pero riguroso en el tratamiento del tema y de los datos informativos.
- Las lectoras y los lectores de LEISA tienen diferentes experiencias y trayectorias personales, por lo que las personas autoras deben tratar de escribir en una forma que permita que el conocimiento y la información contenida en sus artículos sea accesible al público diverso: agricultores/as familiares, campesinos/as, técnicos/as y profesionales de campo, estudiantes y docentes, investigadores/as, académicos/as, autoridades políticas y otras personas interesadas.
- Es importante que a los nombres locales de plantas y animales se adjunte el nombre científico correspondiente para poder brindar un acceso más universal a la información.
- Las abreviaciones y acrónimos deben ser explicados (nombres completos) en su primera mención en el texto.
- En el caso de que un artículo incluya información estadística en cuadros y gráficos, es muy importante que las personas autoras adjunten los archivos Excel o las bases de datos en los que se ha procesado la información.
- Los artículos pueden incluir cinco referencias a las fuentes citadas en el texto. El formato de citación a usar es APA 7.
- Los artículos pueden tener una extensión de 800 a 2500 palabras e incluir dos o tres ilustraciones (fotos; figuras como gráficos estadísticos, diagramas de flujo y mapas; u otro tipo de ilustraciones, como cuadros, etc.). Es importante que se proporcionen en archivos aparte, incluyendo el crédito correspondiente (autoría de fotos e ilustraciones, y fuentes —referencias— de gráficos, cuadros y mapas).
- Los artículos se editarán en el estilo de LEISA revista de agroecología y, si fuere necesario, se acortarán. En algunos casos se requerirá a las personas autoras proporcionar información adicional o algunas aclaraciones. Las contribuciones editadas de esta manera serán presentadas a las personas autoras para su aprobación antes de la publicación.

- Las personas autoras deben proporcionar, además de su correo electrónico, su dirección postal, número telefónico y página web, si la tuvieran (la revista solo publicará el correo electrónico y la página web, a menos que las personas autoras soliciten la publicación de otros datos de contacto). Estos datos serán publicados al final de cada artículo para ampliar la posibilidad de intercambio con las lectoras y los lectores.
- Las personas autoras deberán incluir una breve información (50 palabras como máximo) sobre su actividad profesional (lugar de trabajo o estudio, institución a la que pertenecen o si son trabajadores independientes).

## Sobre las imágenes

- Son particularmente adecuadas para la revista las fotografías en alta resolución y los dibujos lineales.
- Toda figura (foto o ilustración) debe enviarse por separado respecto del archivo de texto, de preferencia en formato JPG o PSD; y con una resolución mínima de 300 DPI (*dots per inch* o «puntos/píxeles por pulgada») para imágenes cuyas dimensiones impresas sean de 60 cm en el mayor de sus lados. Para que una imagen pueda imprimirse en alta calidad, debe «pesar» más de 2 MB (megabytes) en formato JPG.
- Es muy importante que las personas autoras envíen las imágenes por separado y no insertas o «pegadas» en un archivo Word o Power Point, pues estos programas realizan una reducción de la calidad de las fotos y figuras. Las personas autoras deben tener en cuenta que no es necesario que diagramen sus textos, pues obligatoriamente LEISA edita gráficamente todos los textos para las versiones digital e impresa de la revista.

## Sobre la distribución para los autores

- Toda persona autora tiene derecho a un ejemplar de la revista impresa, que le será enviado a su dirección postal.
- Cada una de las ediciones de LEISA se difunde en su página web y se anuncia en sus redes sociales. Las suscriptoras y los suscriptores a la edición digital reciben LEISA en su dirección de correo electrónico.
- Toda contribución de artículos dirigirla a: Ana Dorrego Carlón - LEISA revista de agroecología. Correo electrónico: [anadorrego@gmail.com](mailto:anadorrego@gmail.com)  
Visite nuestro sitio en internet: [www.leisa-al.org](http://www.leisa-al.org)

# LEISA

## revista de agroecología



Indira Alva

## Anunciamos nuestra edición 40-2, dedicada a «Juventudes e infancias en la agroecología»

La industrialización de la producción de alimentos ha fracturado los lazos familiares y comunitarios en el campo, impulsando la migración de las juventudes debido a la falta de oportunidades y condiciones laborales precarias. Esta marginación no solo vulnera sus derechos, sino que también pone en riesgo los modos de vida campesinos e indígenas.

Sin embargo, en los últimos años han emergido experiencias que muestran cómo las juventudes rurales están asumiendo un rol activo en la transformación de sus territorios. Cada vez más jóvenes participan en iniciativas agroecológicas, recuperando prácticas tradicionales, innovando en la producción y comercialización, y creando redes de apoyo para fortalecer su permanencia

en el campo. Esta edición de LEISA revista de agroecología busca visibilizar sus experiencias y reflexiones: ¿cómo se posicionan dentro del movimiento agroecológico? ¿Qué desafíos enfrentan y qué estrategias han desarrollado para superarlos? ¿Cómo la creación de espacios participativos fortalece su papel en la transformación del campo?

Queremos conocer las perspectivas de los propios jóvenes sobre la agricultura, las dificultades específicas que enfrentan y las medidas que consideran necesarias para superarlas. Esperamos sus contribuciones de artículos y noticias sobre «**Juventudes e infancias en la agroecología**» antes del 30 de junio de 2026. Dirigirlas a Ana Dorrego: [anadorrego@gmail.com](mailto:anadorrego@gmail.com)

La presente edición ha sido un esfuerzo conjunto de:

